



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR
TRASLADO CONTESTACIÓN - EXCEPCIONES
(Artículo 175 CPACA)

SIGCMA

Cartagena de Indias, 30 de octubre de 2017

HORA: 08:00 A. M.

Medio de control	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación	13-001-23-33-000-2016-00534-00
Demandante	OLGA ITALINA SALVADOR BETANCOURT
Demandado	NACIÓN-RAMA JUDICIAL-DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL-
Conjuez Ponente	MARIO ANDRÉS FELIZ MONSALVE

EN LA FECHA SE CORRE TRASLADO POR EL TÉRMINO LEGAL DE TRES (03) DÍAS A LA PARTE DEMANDANTE DE LAS EXCEPCIONES FORMULADAS EN EL ESCRITO DE CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA PRESENTADA EL DÍA 25 DE OCTUBRE DE 2017, POR LA DRA. MARLYN CAROLINA VELASCO VANEGAS, APODERADA DE LA **NACIÓN-RAMA JUDICIAL-DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL**, Y QUE SE ENCUENTRA VISIBLE A FOLIOS 68-101 DEL EXPEDIENTE.

EMPIEZA EL TRASLADO: 31 DE OCTUBRE DE 2017, A LAS 8:00 A.M.


JUAN CARLOS GALVIS BARRIOS
SECRETARIO GENERAL

VENCE EL TRASLADO: 02 DE NOVIEMBRE DE 2017, A LAS 5:00 P.M.

JUAN CARLOS GALVIS BARRIOS
SECRETARIO GENERAL

Olm

Centro Avenida Venezuela, Calle 33 No. 8-25 Edificio Nacional-Primer Piso
E-Mail: stadcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co
Teléfono: 6642718





Cartagena de Indias D. T. y C.

Honorable Magistrado Ponente
Mario Andrés Feliz Monsalve
Conjuez Tribunal Administrativo de Bolívar

Radicación: 13001-23-33-000-2016-00534-00

Demandante: Olga Italina Salvador Betancour

Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

MARLYN CAROLINA VELASCO VANEGAS, identificada con cédula de ciudadanía No. 45.550.822 de Cartagena, con Tarjeta Profesional de Abogada No. 166.460, obrando en mi condición de apoderada de la NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL en el proceso de la referencia, según poder que adjunto, procedo en la oportunidad legal, a contestar la demanda del proceso de la referencia, en los siguientes términos:

1

EN RELACIÓN CON LOS HECHOS

3.1. No me consta, pero con la demanda se acompaña certificado en ese sentido, emitida por la Coordinadora de Talento Humano de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cartagena.

3.2. No es un hecho, sino apreciaciones legales del apoderado del demandante.

3.3. No es un hecho, sino apreciaciones legales del apoderado del demandante.

3.4. No es un hecho, sino apreciaciones legales del apoderado del demandante.

3.5. No es un hecho, sino apreciaciones legales del apoderado del demandante.

3.6. No es un hecho sino apreciaciones legales del apoderado del demandante.

3.7. No es un hecho, sino señalamiento y citación de jurisprudencia por parte del apoderado del demandante.

3.8. No es cierto. La sentencia del 29 de abril de 2014 proferida por la Sala de Conjueces del Consejo de Estado, es el resultado del medio de control de Nulidad Simple señalado por la ley, cuyo objeto es la defensa y protección del interés general y del orden jurídico abstracto, que se limita a decretar o no la nulidad del acto impugnado solicitado por cualquier persona, y por lo tanto, no puede imponer condenas pecuniarias, ni sustituir la decisión por otra, ni rehacer el acto, ni tomar medidas distintas a las atinentes a la propia nulidad, razón por la que en el referido fallo nada se decidió en torno a derechos subjetivos.

3.9. No es un hecho, es una transcripción jurisprudencia.

3.10. No es un hecho

SOBRE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA

Me opongo a todas las declaraciones y condenas que sean contraías a la Entidad que represento, porque carecen de fundamentos jurídicos tal como se demostrará a continuación.

Es importante aclarar que a través de Resolución No. 5300 de 04 de agosto de 2016, proferida por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, se resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución 760 del 02 de junio de 2015, notificada personalmente el 27 de agosto de 2016.



RAZONES DE LA DEFENSA

De conformidad con lo señalado en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política, corresponde al Congreso de la República fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la fuerza pública y regular el régimen de prestaciones sociales mínimas de los trabajadores oficiales.

En ejercicio de las anteriores potestades, el Congreso de Colombia expidió la Ley 4ª de mayo 18 de 1992, mediante la cual otorgó al Gobierno Nacional la facultad exclusiva para fijar el régimen salarial y prestacional los funcionarios y empleados de la Rama Judicial, por lo cual expide anualmente los decretos correspondientes en los que determina la remuneración mensual para cada uno de los servidores públicos basado en criterios propios.

El Artículo 14 de la Ley 4ª de mayo 18 de 1992, establece que:

“El Gobierno Nacional establecerá una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del salario básico, sin carácter salarial, para los magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, agentes del Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y para los jueces de la República, incluidos los magistrados y fiscales del Tribunal Superior Militar, Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar, excepto los que opten por la escala de salarios de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del primero (1) de enero de 1993.

Igualmente tendrán derecho a la prima de que trata el presente artículo, los delegados departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil, los registradores del distrito capital y los niveles directivo y asesor de la Registraduría Nacional del Estado Civil”.

Parágrafo. Dentro del mismo término revisará el sistema de remuneración de funcionarios y empleados de la rama judicial sobre la base de la nivelación o reclasificación atendiendo criterios de equidad”.

El Gobierno Nacional en desarrollo de las normas señaladas expidió el Decreto No. 57 de enero 7 de 1993, a través del cual estableció el nuevo régimen salarial y prestacional de los servidores de la Rama Judicial, el cual señaló en su artículo 6º lo siguiente:

“Artículo 6º. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, se considera como prima, sin carácter salarial el treinta por ciento (30%) del salario básico mensual de los Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, de los Jueces de la República, de los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, los Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar. (...).” (Subrayas fuera de texto).

Sobre el tema en comento la Honorable Corte Constitucional, mediante sentencia C-279 de junio 24 de 1996, en el trámite de la Acción Pública de Inconstitucionalidad promovida, entre otros, contra algunos apartes de la Ley 4ª de 1992, **declaró exequibles las frases “sin carácter salarial”** del artículo 14 ibídem y señaló en lo pertinente:

“Igualmente, la Corte Constitucional, ha sostenido que el legislador conserva una cierta libertad para establecer, qué componentes constituyen, o no salario así como la de definir y desarrollar el concepto de salario, pues es de su competencia desarrollar la Constitución.

Las definiciones de convenios internacionales que transcribe la actora no significan que el legislador nacional haya perdido la facultad de tomar o no



Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Seccional Cartagena

en cuenta una parte de la remuneración que perciben los trabajadores para definir las bases sobre las cuales han de hacerse otros pagos.

Así pues, el considerar que los pagos por primas técnicas y especiales no sean factor salarial, no lesiona los derechos de los trabajadores, y no implica una omisión o un incorrecto desarrollo del especial deber de protección que el Estado colombiano tiene en relación con el derecho al trabajo, ni se aparta de los deberes que Colombia ha adquirido ante la comunidad internacional. ... (Subrayas fuera de texto)

Posteriormente, con la entrada en vigencia de la Ley 332 del 19 de diciembre de 1996, que modificó la Ley 4ª de 1992 y dictó otras disposiciones, se levantó parcialmente el carácter no salarial del Artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, al establecer dicha norma en su artículo 1º:

3

“La prima especial prevista en el primer inciso del artículo 14 de la Ley 4a. de 1992, para los funcionarios allí mencionados y para los fiscales de la Fiscalía General de la Nación, con la excepción allí consagrada, que se jubilen en el futuro, o que teniendo reconocida la pensión de jubilación aún se encuentren vinculados al servicio, hará parte del ingreso base únicamente para efectos de la liquidación de la pensión de jubilación, para lo cual se harán las cotizaciones de pensiones establecidas por la ley.

La anterior prima con las mismas limitaciones, también se aplicará a los Magistrados Auxiliares y abogados asistentes de las Altas Cortes, Magistrados de los Consejos Seccionales de la Judicatura, Magistrados del Tribunal Nacional, y Magistrados del extinto Tribunal Disciplinario y los Procuradores Delegados de la Procuraduría General de la Nación.” (Subrayas y negrillas fuera de texto).

Así las cosas, por mandato legal expreso del Artículo 14 de la Ley 4ª de mayo 18 de 1992, la prima especial, no tiene carácter salarial, lo que significa que dicho porcentaje no constituye factor de salario para la liquidación y pago de las primas de servicios, navidad, vacaciones, auxilio de cesantía y bonificación por servicios prestados, se reitera ya fue objeto de análisis y decisión de fondo por la Corte Constitucional por ende se constituye como **COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL**.

Ahora, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda el 2 de abril de 2009, con número de radicación: 11001-03-25-000-2007-00098-00(1831-07), declaró nulo el artículo 7º del Decreto 618 de 2007, el que señalaba:

“ARTICULO 7. El treinta por ciento (30%) de la remuneración mensual de los siguientes servidores públicos se considera como prima especial, sin carácter salarial: ... 1. Del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado: Secretario Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, Secretario General, Jefe de Control Interno, Director Administrativo, Director de Planeación, Director de Registro Nacional de Abogados, Director de Unidad Secretario de Sala o Sección, Relator, Secretario de Presidencia del Consejo de Estado, 2. De la Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial: Director Administrativo, Director Seccional, 3. De los Tribunales Judiciales: Abogado Asesor (...)”

6.1.2. SENTENCIA NULIDAD DEL CONSEJO DE ESTADO DE FECHA 29 DE ABRIL DE 2014

Por su parte, el Consejo de Estado, profirió sentencia el 29 de abril de 2014, dentro del proceso No 11001032500020070008700, en atención a la demanda de acción de nulidad contemplada en el Artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, providencia en la cual se decidió declarar la nulidad de unos artículos de los decretos salariales desde 1993 al 2007, en la cual se indicó que:

“De acuerdo con los criterios establecidos en la ley marco, esto es la Ley 4ª de 1992, es claro que el Gobierno Nacional contravino los criterios fijados



por el legislador con la expedición de los decretos demandados, pues como se pudo observar, el literal a) del artículo 2º de la mencionada Ley estableció que de ninguna manera se podían desmejorar los salarios y prestaciones sociales. Sin embargo, los decretos demandados interpretaron erróneamente y aplicaron indebidamente la Ley 4ª de 1992 al haber mermado el salario de un grupo de servidores públicos, razón suficiente para determinar que son contrarios a la Constitución y a la Ley, así como para declarar su nulidad.”

Es de señalar, que la sentencia en cita decretó únicamente la nulidad de apartes de los decretos salariales para los servidores públicos de la Rama Judicial de 1993 a 2007, que establecieron la prima especial, **sin que se pronunciara sobre disposiciones consignadas en los decretos posteriores es decir de 2008 a 2014.**

4

Teniendo en cuenta la sentencia del Consejo de Estado, y atendiendo que las facultades legales para reglamentar y proferir los decretos salariales son inherentes al Gobierno Nacional, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial ofició al Departamento Administrativo de la Función Pública, órgano competente para fijar las políticas en materia salarial y prestacional en el sector público, consultando específicamente sobre los efectos de la citada declaratoria de nulidad frente a la disposición salarial vigente para el año 2014 en la Rama Judicial, que corresponde al Decreto 194 de 07 de febrero de 2014, dado que ésta norma contiene la misma redacción y procedimiento para liquidar la prima especial que de hecho ha aplicado la entidad, así como sobre los decretos expedidos por el Ejecutivo del año 2008 en adelante, los cuales gozan de la presunción de legalidad como quiera que no han sido anulados por el ente competente. De la consulta elevada al citado ente administrativo dan cuenta los oficios DEAJRH14-6861 del 27 de agosto de 2014, DEAJ14-1212 del 5 de noviembre de 2014 y el DEAJRHH15-191 de 03 de marzo de 2015.

En respuesta, el Departamento Administrativo de la Función Pública, en comunicación de fecha 17 de abril de 2015, suscrita por la Directora Jurídica, Dra. CLAUDIA PATRICIA HERNÁNDEZ LEÓN -registro EXDE15-9473 de 22 de abril de 2015 de nuestra correspondencia institucional-, con sustento en conceptos y sentencias del Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia cuyos apartes concernientes cita textualmente, manifiesta, entre otros, que la sentencia del 29 de abril de 2014 es el resultado del medio de control de simple nulidad, cuyo objeto es la defensa y protección del interés general y del orden jurídico abstracto, que se limita a decretar o no la nulidad del acto impugnado y por tanto no puede imponer condenas pecuniarias, ni sustituir la decisión por otra, ni rehacer el acto, ni tomar medidas distintas a las atinentes a la propia nulidad, razón por la que en el referido fallo nada se decidió en torno a derechos subjetivos.

Aclara que la competencia que la ley le confiere a ese Departamento Administrativo para conceptuar en materia salarial y prestacional es:

“...guarda estricta relación con la interpretación general de aquellas expresiones de los decretos salariales que ofrezcan algún grado de dificultad en su comprensión, sin que tal atribución comporte, de manera alguna, la definición de casos particulares que se presenten al interior de la Rama Judicial; cuya resolución, como resulta apenas obvio, corresponderá en todos los casos a la autoridad empleadora y nominadora...//...sin olvidar que las competencias atribuidas a este Departamento Administrativo en el Decreto 188 de 2004 tampoco conlleva, de manera alguna, la definición o adopción de mecanismos administrativos para solventar las situaciones o reclamaciones individuales generadas por fallos judiciales, en cuanto esa materia se encuentra institucionalmente asignada, en su diseño y estructuración, a la Unidad Administrativa Especial Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado...//...Todo lo cual se suma al hecho de que el Gobierno Nacional al dictar los decretos salariales anuales del personal de las distintas entidades y organismos públicos, incluido el de la Rama Judicial, se encuentra sometido no solo a las restricciones impuestas por el artículo 345 Superior, sino también a los literales h) e i) del artículo 2º de la Ley 4ª de 1992 y, particularmente, a la ley de presupuesto de cada



anualidad cuyos montos no pueden ser excedidos por el Ejecutivo ni por ninguna otra autoridad pública. ...”

Así las cosas, efectuar la reliquidación de las prestaciones devengadas por el convocante durante el tiempo en que se desempeñó como Juez de la República, incluyendo el 30% de prima especial como factor de salario y disponer el pago de las diferencias surgidas de la interpretación que tiene de la aplicación de la Ley 4a de 1992 y los Decretos salariales anuales, implicaría para la administración desacatar el ordenamiento legal vigente, toda vez que como se señaló en párrafos anteriores, mediante las facultades conferidas por la mencionada ley, el gobierno nacional está expresamente facultado para expedir los decretos salariales teniendo la potestad de determinar que el 30% de la remuneración mensual sea considerada prima especial sin carácter salarial, aunado como se afirmó en precedencia que ya fue objeto de análisis y decisión de la Corte Constitucional.

5

Con respecto que se liquide el 30% como factor adicional a la remuneración mensual establecida en los decretos salariales, como lo solicita el convocante, que la Administración Judicial pueda disponer con fundamento en los aludidos fallos el reconocimiento y pago a su favor de las diferencias por concepto de salarios, prestaciones sociales y prima especial equivalente al 30% de la asignación básica mensual, por los tiempos de servicio en los que ha desempeñado el cargo, en aplicación a la sentencia de nulidad del 29 de abril de 2014, el cual quedó ejecutoriado el 22 de julio de 2014, es de señalar:

Primero, es importante mencionar que los decretos salariales ha fijado la remuneración mensual, concepto que según la legislación laboral es amplio, es decir comprende todo lo que se percibe como contraprestación del servicio (sueldo básico, prima especial), sin tener en cuenta que sea o no con carácter salarial y conforme al artículo 14 de la Ley 4 de 1992 la prima especial corresponde al 30% del sueldo básico.

Se resalta que el pronunciamiento del Consejo de Estado decretó la nulidad de algunos artículos de los decretos de salarios de los años 1993 a 2007, más no el reconocimiento de derecho alguno a favor de persona determinada. De igual forma, se refirió frente a los decretos salariales desde el año 1993 hasta el 2007, no de los posteriores, lo que permite concluir que los decretos de los años 2008 hasta la fecha, no han sido declarados nulos, por tanto continúan siendo válidos y gozan de presunción de legalidad, por lo que sobre dichos años, no es posible efectuar pago o realizar manifestación ni censura en relación con ellos, ya que continúan vigentes para el ordenamiento jurídico, por ende la prima especial reclamada desde el año 2008 a la fecha se ha liquidado correctamente y corresponde la reglamentación que sobre el tema ha regulado el Gobierno Nacional y hasta la fecha no se ha tenido ninguna manifestación al respecto.

Teniendo en cuenta las consecuencias de la declaratoria de nulidad de decretos salariales del año 1993 a 2007, no sería procedente proponer alguna fórmula conciliatoria por el tiempo laborado hasta el 31 de diciembre de 2007 en aplicación al principio de la prescripción trienal, analizado frente a la fecha de la reclamación administrativa que data de 30 de enero de 2015.

Por lo anterior en relación con la prescripción de los derechos prestacionales, el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968, dispone:

“Las prestaciones que emanen de los derechos consagrados en este decreto prescribirán en tres años contados desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo escrito del empleado o trabajador ante la autoridad competente sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero solo por un lapso igual.”

Por ello, se tiene que, al haberse declarado la nulidad de los Decretos salariales hasta 2007, los pagos y reliquidaciones que reclama hasta esa vigencia y que presuntamente tiene derecho, por haber presentado la reclamación administrativa con fecha 19 de



enero de 2015, se tiene que ha operado el fenómeno prescriptivo trienal del pago de los derechos laborales.

EXCEPCIONES

De conformidad con lo preceptuado en el artículo 175 de la Ley 1437 de 2011, propongo las siguientes excepciones:

1. FALTA DE CAUSA PARA DEMANDAR.

La parte actora, carece de causa para tutelar, en razón a que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, cancela de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, los decretos salariales expedidos por el Gobierno Nacional, los Acuerdos emitidos por el Consejo Superior de la Judicatura y atendiendo la nomenclatura en la cual el empleado se encuentre clasificado de conformidad con el nombramiento y su posesión.

6

Es importante mencionar que los decretos salariales ha fijado la remuneración mensual, concepto que según la legislación laboral es amplio, es decir comprende todo lo que se percibe como contraprestación del servicio (sueldo básico, prima especial), sin tener en cuenta que sea o no con carácter salarial y conforme al artículo 14 de la Ley 4 de 1992 la prima especial corresponde al 30% del sueldo básico.

Se resalta que el pronunciamiento del Consejo de Estado decretó la nulidad de algunos artículos de los decretos de salarios de los años 1993 a 2007, más no el reconocimiento de derecho alguno a favor de persona determinada.

La Resolución No. 731 del 01 de junio de 2015 proferida por la Dirección Seccional de Administración Judicial Cartagena-Bolívar, así como la Resolución 5278 de 03 de agosto de 2016, proferida por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, la cual resolvió el recurso de apelación contra el acto inicial, y cuyas nulidades se pretenden en el presente proceso, tiene sustento en lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 y la Ley 332 de 1996.

Por lo tanto las consideraciones relativas a la validez o a la vigencia de los decretos reglamentarios, invocadas como sustento de sus peticiones por el demandante, no afectan la presunción de legalidad del acto administrativo demandado ni pueden tenerse como argumentos suficientes para disponer su anulación, toda vez que el mismo tiene su sustento en lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley 4a de 1992, norma que fue declarada exequible por la Corte Constitucional.

Con base en las consideraciones anteriores, solicito sean denegadas las pretensiones de la demanda.

2. PRESCRIPCIÓN TRIENAL DE LOS DERECHOS RECLAMADOS.

Los derechos laborales prescriben dentro de los tres (3) años siguientes a su existencia y consolidación para todos los ciudadanos. En relación con la prescripción de los derechos prestacionales, el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968, dispone:

“Las prestaciones que emanen de los derechos consagrados en este decreto prescribirán en tres años contados desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo escrito del empleado o trabajador ante la autoridad competente sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero solo por un lapso igual.”

Se trata como se acaba de ver, de una institución jurídica que afecta los derechos de los servidores públicos reclamados tardíamente, como en este caso ocurre, por tanto frente a la pretensión del reconocimiento y pago del 30% como adicional al salario, debe indicarse que la prescripción trienal del derecho se ha materializado.

Así pues, al haberse declarado la nulidad de los decretos salariales hasta 2007, los pagos y reliquidaciones que reclama hasta esa vigencia y que presuntamente tiene derecho, por haber presentado la reclamación administrativa con fecha 19 de enero de



2015, se tiene que ha operado el fenómeno prescriptivo trienal del pago de los derechos laborales.

3. LA INNOMINADA O GENÉRICA.

Solicito se de aplicación al inciso 2 del art. 187 de la Ley 1437 de 2011, según el cual en el evento que en el transcurso del proceso el fallador encuentre probado una excepción de fondo la decrete en la sentencia.

FUNDAMENTO EN DERECHO

7

Constitución Política de Colombia, Ley 1437 de 2011, Ley 270 de 1996, Ley 4 de 1992, en las normas citadas en el capítulo de razones de la defensa, y demás normas concordantes aplicables al caso.

PETICIONES

1. **PRINCIPAL.** Que se declaren las excepciones que resulten probadas.
2. **SUBSIDIARIA.** Que se nieguen las pretensiones de la demanda y, consecuencialmente, **CONDENE EN COSTAS** a la parte demandante, por las razones de hecho y de derecho expuestas en este escrito y se declare que mi representada no tiene responsabilidad administrativa alguna en los hechos que dieron origen a este proceso.

PRUEBAS

1. Copia simple del expediente administrativo de la actuación objeto del presente proceso que viene aportada en la presente contestación.
2. Las que el Señor Juez considere pertinentes y conducentes decretar.

ANEXOS

1. Poder otorgado por HERNANDO DARÍO SIERRA PORTO, en calidad de Director Ejecutivo de Administración Judicial – Seccional Cartagena.
2. Resolución No. 4293 del 21 de agosto de 2014, expedida por el Directora Ejecutiva de Administración Judicial.
3. Copia simple del expediente administrativo de la actuación objeto del presente proceso.

NOTIFICACIONES

Mi mandante y la suscrita apoderada en la sede de la Dirección Seccional de Administración Judicial de esta ciudad, ubicada en el Centro, Edificio Cuartel del Fijo, Carrera 5 No. 36-127, Piso 2 Oficina 210. Teléfonos: 6642408 y 6602124.

Correo electrónico: dirseccgena@cendoj.ramajudicial.gov.co

Atentamente,


MARLYN CAROLINA VELASCO VANEGAS
CC. 45.550.822 de Cartagena
T.P.A. No. 166.460 del C.S.J.

SECRETARIA TRIBUNAL ADM
TIPO: CONTESTACION DE DEMANDA 2016-00534-00
REMITENTE: MIGUEL ZULETA CARRASQUILLA
DESTINATARIO: MARIO ANDRES FELIZ MONSALVE
CONSECUTIVO: 20171051151
No. FOLIOS: 41 — No. CUADERNOS: 0
RECIBIDO POR: SECRETARIA TRIBUNAL ADM
FECHA Y HORA: 25/10/2017 03:58:04 PM

FIRMA: 



Cartagena de Indias D. T. y C.,

Señores
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLIVAR
Conjuez: **Mario Andres Feliz Monsalve**

REF: Proceso No 13001-23-33-000-2016-00534-01.
DEMANDANTE: **OLGA ITALINA SALVADOR BETANCOURT**
DEMANDADO: **RAMA JUDICIAL**
MEDIO DE CONTROL: Nulidad y Restablecimiento

8

HERNANDO DARIO SIERRA PORTO, mayor de edad, con domicilio en Cartagena, identificad con la Cédula de Ciudadanía No. 73.131.106 de Cartagena, en mi calidad de representante judicial de la Nación – Rama Judicial, como Director Ejecutivo Seccional Administración judicial, nombrado por Resolución No. 4293 de agosto 21 de 2014, proferida por la Directora Ejecutiva de Administración Judicial y posesionado (a), según consta en el Acta del 26 de agosto de 2014, de conformidad con las facultades otorgadas por la Ley 270 de 1996, artículo 103 numeral 7, confiero poder especial, amplio y suficiente a **MARLYN CAROLINA VELASCO VANEGAS**, abogada de la Dirección Seccional de Administración Judicial, con cédula de ciudadanía No 45.550.822 de Cartagena, con Tarjeta Profesional de Abogada No. 166.460, para que asuma la representación y defensa de la Nación – Rama Judicial en el proceso del asunto.

La apoderada queda facultada para desistir, sustituir, conciliar en todas las etapas administrativas y judiciales, así como realizar todo cuanto sea necesario para cumplir debidamente este mandato, exceptuando únicamente la facultad de recibir.

Sírvase reconocer personería a la apoderada.

HERNANDO DARIO SIERRA PORTO
C. C. No. 73.131.106 de Cartagena
Director Seccional de Administración Judicial

ACEPTO:

MARLYN CAROLINA VELASCO VANEGAS
C.C. 45.550.822 de Cartagena
T.P.A. No.166.460 del C. S. de la J.

FORMA JURADICA DEL PODERADO EN SU FAVOR

27 SEP 2017

HERNANDO DARIO SIERRA PORTO

73.131.106



Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Sala Administrativa
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

RESOLUCIÓN No. 4293

21 A60. 2014

Por medio de la cual se hace un nombramiento en propiedad.

LA DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
En ejercicio de sus facultades legales estatutarias, especialmente las conferidas en el artículo 99 de la Ley 270 de 1996

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO.- Nombrar en propiedad al doctor HERNANDO DARIO SIERRA PORTO identificado con la cédula de ciudadanía No.73.131.106 de Cartagena, en el cargo de Director Seccional de Administración Judicial de Cartagena.

ARTÍCULO SEGUNDO.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D. C., a

21 A60. 2014

Celina Oróstegui de Jiménez
CELINEA ORÓSTEGUI DE JIMÉNEZ

RHJ/JMG/LujiaCG



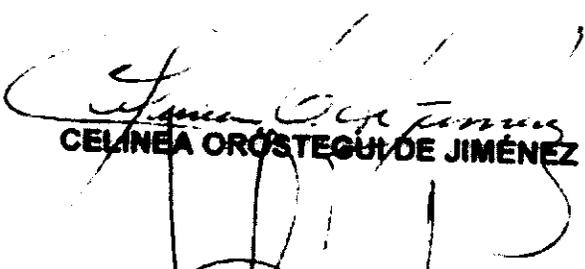


Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Sala Administrativa
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

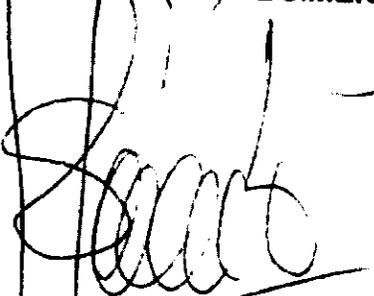
ACTA DE POSESION

En la ciudad de Bogotá, D. C., a los 26 días del mes de agosto de 2014, se presentó al Despacho de la Directora Ejecutiva de Administración Judicial el doctor HERNANDO DARIO SIERRA PORTO, identificado con la cédula de ciudadanía No.73.131.106 de Cartagena, con el fin de tomar posesión del cargo al cual fue nombrado en propiedad de Director Seccional de Administración Judicial de Cartagena, Prestó el juramento de rigor ordenado por la Constitución y la Ley.

LA DIRECTORA EJECUTIVA


CELINEA ORÓSTEGUI DE JIMÉNEZ

EL POSESIONADO


HERNANDO DARIO SIERRA PORTO



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Sala Administrativa
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Cartagena

83

Doctor
ALBERTO VELEZ BAENA
Cartagena

ASUNTO: Notificación personal, Resolución mediante la cual resuelve Recurso de Apelación.

10

Respetado doctor:

La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, mediante Resolución No. 5300 del 04 de agosto de 2016, resolvió recurso de apelación, presentada por usted, en nombre y representación de OLGA ITALINA TSALVADOR BETANCOURT, identificada con C.C. 33.131.570 de Cartagena, me permito notificarle del contenido de la misma, para lo cual se deja constancia de la entrega gratuita de un ejemplar del mencionado acto en diecinueve (19) folios.


IRIS MARIA CORTECERO NUÑEZ
Abogada DESAJ Cartagena

Recibí lo enunciado y me doy por notificado personalmente:


ALBERTO VELEZ BAENA
C.C. N° 9.074.593 de Cartagena
Fecha: Agosto 24/016
Hora: 12:30

Centro, Edif. Cuartel del Fijo, Carrera 5° N° 36- 127
Teléfonos: 6602124 - 6642455 Fax 6645708
E-mail: dirseccgena@cendoj.ramajudicial.gov.co



ES FIEL COPIA TOMADA DE SU ORIGINAL
DIRECCION EJECUTIVA DE
ADMINISTRACION JUDICIAL

Agosto 8 de 2016



Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Sala Administrativa
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

RESOLUCION No. 5300 04 AGO. 2016

Por medio de la cual se resuelve un Recurso de Apelación.

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACION JUDICIAL
en ejercicio de sus facultades legales estatutarias y en especial
las conferidas en el artículo 99 de la Ley 270 de 1.996

CONSIDERANDO

Que la doctora OLGA ITALINA SALVADOR BETANCUR, identificada con la cédula de ciudadanía No. 33,131.570 de Cartagena, en su condición de funcionaria de la Rama Judicial como Magistrada del Tribunal Administrativo de Bolívar, a través de apoderado, doctor ALBERTO VÉLEZ BAENA, quien se identifica con C.C. No. 9,074.593 de Cartagena y T. P. No. 52.656 del Consejo Superior de la Judicatura, en escrito radicado en la Seccional de Administración Judicial de Cartagena - Bolívar el 19 de enero de 2015 y en ejercicio del derecho de petición consagrado en la Constitución Política y en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, le solicita a la administración judicial expresamente:

"...ordenar la reliquidación de todos los salarios, primas anuales, cesantías y bonificación por servicios... considerando a este efecto la sentencia de 29 de abril de 2014 proferida por la Sala de Conjuces del H. Consejo de estado...con ponencia de la doctora MARÍA CAROLINA RODRIGUEZ RUIZ....."

En el escrito petitorio el apoderado relaciona despachos judiciales y periodos en los cuales su poderdante se ha desempeñado como Magistrado(a) y/o Juez de la República, desde el 01 de enero de 1993 hasta el 27 de enero de 2008.

Y como fundamento de la reclamación, refiere, entre otros, normas del régimen salarial y prestacional de los servidores públicos, señalando que en el ordenamiento jurídico anterior a la expedición de la Carta del 1991 el concepto de prima opera como un fenómeno retributivo de carácter adicional a la actividad laboral cumplida por el servidor público, noción que se mantiene con la Constitución de 1991.

Manifiesta que el Consejo de Estado mediante sentencia del 19 de mayo de 2010, expediente No. 2005-1134, cuyos apartes pertinentes transcribe, inaplicó por inconstitucionales los artículos 7 de los Decretos Nos. 2740 de 2000, 2720 de 2001 y 6 de los Decretos Nos. 673 de 2002, 3569 de 2003, en cuanto previeron como prima sin carácter salarial el treinta por ciento (30%) del salario básico mensual, y condenó a la

cual se declaró la nulidad de los artículos que en los decretos de salarios de los años 1993 a 2007 disponían que se considera Prima sin carácter salarial el 30% de la asignación básica mensual de los cargos allí relacionados, advirtiendo que dicha prima no puede ser inferior al 30% del salario básico mensual.

Previo estudio de los argumentos expuestos de manera escrita en la petición presentada, mediante resolución 760 del 02 de junio de 2015 la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cartagena - Bolívar resolvió no acceder a las pretensiones de la interesada y señala como fundamentos de la decisión, en resumen, que el Gobierno Nacional en desarrollo de las normas generales previstas en la Ley 4ª de 1992 creó en su artículo 14 una prima especial sin carácter salarial, no inferior al 30% ni superior al 60% del salario básico, entre otros para los Jueces de la República. Que posteriormente la Ley 332 de 19 de diciembre de 1996, modificatoria de la Ley 4ª de 1992, reformó parcialmente el carácter salarial de la prima especial prevista en el artículo 14, señalando que hará parte del ingreso base únicamente para efectos de la liquidación de la pensión de jubilación, para lo cual se harán las cotizaciones de pensiones establecidas en la ley.

Que como quiera que las normas que regulan dicho concepto se encuentran actualmente vigentes y opera sobre ellas la presunción de legalidad, mientras no hayan sido anuladas o suspendidas por la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, esa Dirección Ejecutiva Seccional tiene la obligación constitucional de aplicarlas cabalmente.

Aclara la Dirección Seccional sobre los fallos del Consejo de Estado, que en los casos en que se ejerce la acción de nulidad y restablecimiento del derecho y se obtiene la nulidad del acto y el reconocimiento de una situación jurídica particular y concreta, el efecto restablecedor solo es predicable de las partes en contienda, esto es quienes promovieron y obtuvieron declaración a su favor.

Señala para finalizar que esa Dirección Seccional es un órgano técnico y administrativo que tiene a su cargo, entre otras funciones, la ejecución del presupuesto soportada en la apropiación y recursos situados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y que en lo concerniente al pago de salarios de los servidores judiciales adscritos a su Distrito Judicial cumple una función netamente pagadora, sujeta a los lineamientos precisados en la normatividad vigente y a las orientaciones de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

De la citada decisión se notificó personalmente el apoderado el 18 de junio de 2015, y en escrito radicado en la Seccional el 01 de julio de 2015 interpone recurso de Apelación, inconformidad que sustenta con los mismos planteamientos formulados en la petición inicial, a los que agrega que el acto administrativo que apela desconoce la existencia de derechos ciertos e indiscutibles de su poderdante, lo que impone revocarlo y restablecer los derechos laborales vulnerados.

Por Auto del 17 de julio de 2015 la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cartagena - Bolívar concede el recurso interpuesto, y con oficio DESAJ-135 -15 del 23 de julio de 2015 remite el cuaderno administrativo a esta Dirección Ejecutiva, donde fue radicado en el Centro de Gestión Documental, el 30 de julio de 2015 para resolver en la alzada.

ES FIEL COPIA TOMADA DE SU ORIGINAL
DIRECCION EJECUTIVA DE
ADMINISTRACION JUDICIAL
Agosto 8 de 2016

Hoja No 3 de la Resolución No. 5300 del 04 AGO. 2016 por
medio de la cual se resuelve un Recurso de Apelación de la doctora OLGA ITALINA
SALVADOR BETANCUR

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Una vez estudiado el informativo a la luz de la normatividad jurídica existente, en especial lo señalado en la Constitución Política, las leyes 4ª de 1992, 270 de 1996, 332 de 1996, 1437 de 2011, los Decretos expedidos anualmente desde el año 1993 por el Ejecutivo para fijar el régimen salarial y prestacional de los servidores públicos de la Rama Judicial, aunado a los argumentos expuestos por el apoderado de la apelante, esta Dirección se permite señalar:

- > Es pertinente precisar en primer lugar, que por estar en la Rama Judicial la ordenación del gasto y la función pagadora descentralizadas, en virtud de la competencia funcional asignada por la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, reclamaciones como la que nos ocupa, sobre el régimen salarial y prestacional de los servidores judiciales, deben ser resueltas en primera instancia por la Dirección Seccional de Administración Judicial a la que se encuentre adscrito el Despacho en el que presta o prestó servicios el reclamante, primordialmente en aras de salvaguardar su derecho al debido proceso, el derecho de contradicción y el principio de la doble instancia.

En el anterior presupuesto y con el fin de establecer los tiempos de servicio efectivamente prestados por la peticionaria en el cargo de Juez de la República y/o Magistrado(a) vinculado(a) a Despachos adscritos a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cartagena - Bolívar, se procedió a confrontar el histórico laboral que obra en el aplicativo de Nómina KACTUS contra la información suministrada por el apoderado, la certificada por la Coordinadora del Área de Talento Humano de la Seccional en el documento de fecha 16 de junio de 2016 que se encuentra en el cuaderno administrativo del recurso, y la plasmada en el derecho de petición, confirmándose que la peticionaria ha ejercido como funcionaria en los siguientes despachos y periodos de servicio:

DESPACHO	DESDE	HASTA
Magistrada del Tribunal Administrativo de Bolívar	01/01/1993	27/01/2008

De manera que es menester precisar al respecto, que el pronunciamiento objeto de recurso de apelación se entiende referido única y exclusivamente a los tiempos de servicios prestados por la peticionaria en Despachos adscritos a la Seccional de Administración Judicial de Cartagena - Bolívar, desde el 01 de enero de 1993 hasta el 27 de enero de 2008.

En consecuencia, se procede a desatar el recurso interpuesto, para lo cual

nulidad, con los efectos previstos en su parte motiva, de los artículos que en los decretos anuales de salarios de la Rama Judicial de los años 1993 a 2007 dispusieron que el 30% de la asignación básica de los cargos allí enlistados, entre ellos el de Juez de la República, se consideraba como Prima sin carácter salarial, porque con esas prescripciones lo que realmente se hizo fue restarle ese porcentaje al sueldo básico mensual de dichos servidores y como consecuencia también a sus prestaciones sociales, concluyendo la Sala que la Prima en cuestión debe reconocerse como una retribución adicional, en el equivalente al 30% del valor fijado por el Gobierno Nacional como asignación básica mensual en los decretos anuales de salarios para los cargos beneficiarios de la misma, sin pronunciarse sobre su carácter salarial, significando con ello que el contenido del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 permanece incólume, en cuanto que la prima especial no constituye factor de salario.

12

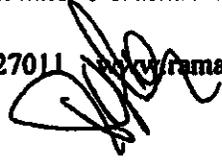
Ahora bien, respecto a los efectos vinculantes que para la administración pueda tener el citado fallo, es del caso manifestarle al apoderado de la apelante que una vez se conoció que la providencia quedó ejecutoriada el 22 de julio de 2014, la administración judicial procedió a calcular el monto de las obligaciones que se pudieran derivar de su cumplimiento y requirió a los organismos competentes instrucciones para acatarla, así como la adición presupuestal del caso al Ministerio de Hacienda. Con este fin se enviaron los oficios DEAJ14-927 del 27 de agosto de 2014, reiterado con oficio DEAJ14-1191 del 4 de noviembre de 2014, de manera que de su trámite emanara la autorización y situado oportuno de recursos para que la administración judicial pudiera atender las obligaciones salariales surgidas a partir de la ejecutoria del mencionado pronunciamiento.

Se ofició igualmente al Departamento Administrativo de la Función Pública, órgano competente para fijar las políticas en materia salarial y prestacional en el sector público, consultando específicamente sobre los efectos de la citada declaratoria de frente a la disposición salarial vigente para el año 2014 en la Rama Judicial, que corresponde al Decreto 194 de 07 de febrero de 2014, dado que ésta norma contiene la misma redacción y procedimiento para liquidar la prima especial que de hecho ha aplicado la entidad, así como sobre los decretos expedidos por el Ejecutivo del año 2008 en adelante, los cuales gozan de la presunción de legalidad como quiera que no han sido anulados por el ente competente. De la consulta elevada al citado ente administrativo dan cuenta los oficios DEAJRH14-6861 del 27 de agosto de 2014, DEAJ14-1212 del 5 de noviembre de 2014 y el DEAJRHH15-191 de 03 de marzo de 2015.

Sobre los requerimientos formulados se pronunció el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en oficio de fecha 30 de diciembre de 2014, a través del Director General de Presupuesto Público Nacional, Dr. FERNANDO JIMÉNEZ RODRÍGUEZ, escrito que fue radicado en el Centro de Gestión Documental de esta Entidad con registro EXDE15-50 el 05 de enero de 2015, y señala en lo pertinente:

"...En ese contexto se reitera que toda erogación incluido el gasto que usted sugiere, debe contar con un título constitutivo de gasto. Pero en estos casos no nos encontramos frente a una sentencia de nulidad y restablecimiento del derecho, que desde luego constituiría un título legítimo de gasto, porque es un crédito judicialmente reconocido, sino que la situación judicial que estamos analizando trata de una sentencia de simple nulidad.

Respecto a las sentencias de simple nulidad, en principio podemos decir que no son título constitutivo de gasto, por la sencilla razón que en nuestro ordenamiento jurídico no existe la



Agosto 8 de 2016

Hoja No 5 de la Resolución No **5300** del **04 AGO. 2016** por
medio de la cual se resuelve un Recurso de Apelación de la doctora OLGA ITALINA
SALVADOR BETANCUR

nulidad de pleno derecho de los actos administrativos particulares, que se expidan con fundamento en uno general que haya sido anulado...

"...Entonces, la verdadera pregunta consiste en determinar lo siguiente: ¿cuál es el efecto de una sentencia de nulidad? La respuesta se encuentra en la misma jurisprudencia:

"Para responder este interrogante cabe destacar que el fin, móvil o motivo de las acciones de nulidad de actos administrativos es el del mantenimiento de la legalidad abstracta, y no el del restablecimiento de derechos de carácter subjetivo. Por lo tanto, las sentencias proferidas en esos juicios, que simplemente declaran la nulidad de actos administrativos no tienen efectos creadores de derechos individuales."!

Por su parte el Departamento Administrativo de la Función Pública, en comunicación de fecha 17 de abril de 2015, suscrita por la Directora Jurídica, Dra. CLAUDIA PATRICIA HERNÁNDEZ LEÓN -registro EXDE15-9473 de 22 de abril de 2015 de nuestra correspondencia institucional-, con sustento en conceptos y sentencias del Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia cuyos apartes concernientes cita textualmente, manifiesta, entre otros, que la sentencia del 29 de abril de 2014 es el resultado del medio de control de simple nulidad, cuyo objeto es la defensa y protección del interés general y del orden jurídico abstracto, que se limita a decretar o no la nulidad del acto impugnado y por tanto no puede imponer condenas pecuniarias, ni sustituir la decisión por otra, ni rehacer el acto, ni tomar medidas distintas a las atinentes a la propia nulidad, razón por la que en el referido fallo nada se decidió en torno a derechos subjetivos(sic).

Aclara que la competencia que la ley le confiere a ese Departamento Administrativo para conceptuar en materia salarial y prestacional *"...guarda estricta relación con la interpretación general de aquellas expresiones de los decretos salariales que ofrezcan algún grado de dificultad en su comprensión, sin que tal atribución comporte, de manera alguna, la definición de casos particulares que se presenten al interior de la Rama Judicial; cuya resolución, como resulta apenas obvio, corresponderá en todos los casos a la autoridad empleadora y nominadora...//...sin olvidar que las competencias atribuidas a este Departamento Administrativo en el Decreto 188 de 2004 tampoco conlleva, de manera alguna, la definición o adopción de mecanismos administrativos para solventar las situaciones o reclamaciones individuales generadas por fallos judiciales, en cuanto esa materia se encuentra institucionalmente asignada, en su diseño y estructuración, a la Unidad Administrativa Especial Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado...//...Todo lo cual se suma al hecho de que el Gobierno Nacional al dictar los decretos salariales anuales del personal de las distintas entidades y organismos públicos, incluido el de la Rama Judicial, se encuentra sometido no solo a las restricciones impuestas por el artículo 345 Superior, sino también a los literales h) e i) del artículo 2° de la Ley 4° de 1992 y, particularmente, a la ley de presupuesto de cada anualidad cuyos montos no pueden ser excedidos por el Ejecutivo ni por ninguna otra autoridad pública. ..."*

Y concluye previniendo: *"...conviene recordar que actualmente se tramita ante la Sección Cuarta del H. Consejo de Estado la tutela No. 2015-00084, promovida por el Dr. Álvaro Quintero Sepúlveda (Juez 18 Administrativo del Circuito de Medellín) contra la Sección Segunda de la misma Corporación, donde se solicita la nulidad de la Sentencia de fecha 19 de abril de 2014, dictada por la Sala de Contueces de la Sección Segunda del H. Consejo de Estado, Expediente No. 11001-03-25-000-2007-00087-00, No. Interno*

exista congruencia entre la parte motiva y la parte resolutive, cuyo resultado bien podría comportar una nueva coyuntura procesal y administrativa. ... (Subrayas y negrillas propias).

Ahora bien, es del caso anotar que frente a una sentencia de nulidad semejante a la que aquí nos ocupa, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público ha sostenido criterios como el contenido en el oficio 4.0.0.1 Rad. No 10246 de julio 6 de 2004, en cuya parte específica señaló:

"La sentencia referida declaró "... la nulidad del literal f) del artículo 1° del Acuerdo No 05 del 15 de febrero de 1.993 proferido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, en lo tocante a la fijación del salario de los empleos de escribiente Grados 07, 06, 05 y 04, de los juzgados del circuito de familia, Promiscuos de Familia y de menores"

En este punto es pertinente mencionar, que en relación a los efectos de las sentencias de nulidad el Consejo de Estado ha expuesto:

"En el campo civil la nulidad pronunciada en sentencia con fuerza de cosa juzgada, tiene efecto retroactivo y da a las partes el derecho para ser reestablecido al estado en que se hallarían, si no hubiese existido el acto o contrato nulo. En el campo administrativo, la sentencia con efecto erga omnes sólo opera hacia el futuro."

(...)

Los efectos cumplidos con base en actos administrativos, en normas declaradas inexequibles o nulas, y que no se hallen sujetos a controversia judicial, guardan su integridad, dado que la declaratoria de nulidad cuando el fallo culmina en proceso, desatado en ejercicio de una acción pública de ese tipo, no tiene en principio, efectos retroactivos, y que la desaparición del precepto obra ex nunc o sea hacia el futuro, por lo que en adelante no puede tomarse decisión fundamental en el mismo, dada su inexistencia a partir de la fecha en que la sentencia que lo declaró injurídico, adquiriera firmeza (...) los actos administrativos dictados con base en el precepto previamente a su anulación, conserva su presunción de legales y deben ser aplicados, salvo el derecho de quienes los hayan impugnado debidamente ante esta jurisdicción (...).

"(...) finalmente debemos anotar que la sentencia en el contencioso de anulación deberá limitarse a decretar o no la nulidad del acto impugnado, porque no podrá imponer condenas pecuniarias, ni sustituir la decisión por otra de su sello jurisdiccional, ni rehacer el acto, ni tomar otras medidas en lugar de las acusadas.

(...)

En este orden de ideas, la nulidad que se decreta contra las normas que tiene vigencia en un determinado periodo fiscal, no altera su validez; es por ello que, aclara esa Alta Corporación, dicha declaratoria no las afecta, y las consecuencias de la nulidad rigen hacia futuro.

Conforme a todo lo indicado, se ha considerado que el pronunciamiento judicial en análisis es de simple nulidad, y per sé no es título constitutivo de gasto. en los términos el artículo 346 de la Constitución Política y 38 del Estatuto Orgánico del presupuesto, normas analizadas a través de nuestra comunicación 92173 señalada supra. (Subrayas y negrillas propias).

De lo expuesto es indiscutible para esta Dirección, por un lado, que en concepto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público la sentencia proferida por el Consejo de Estado

Hoja No 7 de la Resolución No **5300** del **04 AGO. 2016** por medio de la cual se resuelve un Recurso de Apelación de la doctora OLGA ITALINA SALVADOR BETANCUR

el 29 de abril de 2014, por la cual se decretó la nulidad de algunos artículos de los decretos de salarios de los años 1993 a 2007, no es un título constitutivo de gasto, hecho éste que impide que pueda aplicarse administrativamente al impugnante, o modificar con fundamento en ella la manera como actualmente se liquida la mencionada Prima especial. Y por el otro, el Decreto 194 de 07 de febrero de 2014, "Por el cual se dictan unas disposiciones en materia salarial y prestacional para los servidores públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar y se dictan otras disposiciones", modificado por el Decreto 1257 del 05 de junio de 2015, se encuentran vigentes con total presunción de legalidad -pues no ha sido derogados por norma posterior, ni anulados por la autoridad competente-, como se presumen también legales los decretos salariales de los años 2008 y en adelante, cada uno vigente en la respectiva anualidad, los cuales contienen la misma previsión legal de los artículos anulados, disposiciones que como autoridad administrativa, agentes del Estado y garantes del principio de legalidad debemos cumplir y acatar estrictamente, pues lo contrario sería modificar el régimen salarial expresamente consagrado en dichos preceptos.

De manera que como a la fecha del presente pronunciamiento la posición del Ministerio de Hacienda y Crédito Público no ha variado en relación a los efectos vinculantes de las sentencias de simple Nulidad, ni sobre la solicitud de adición de recursos para cubrir las obligaciones que se pudieran derivar del fallo del 29 de abril de 2014, esta instancia considera que **NO ES VIABLE** acceder a las pretensiones de la H. Magistrada, posición que tiene sustento en el marco legal que impone este actuar en materia de afectación y ejecución presupuestal, normas éstas que deben amparar todas las actuaciones públicas de la administración en cuanto a la ordenación del gasto:

Artículo 345 Constitución Política:

"...En tiempo de paz no se podrá percibir contribución o impuesto que no figure en el presupuesto de rentas, ni hacer erogaciones con cargo al tesoro que no se halle incluida en el de gastos..."

Artículo 346 Constitución Política:

"... El Gobierno formulará anualmente el presupuesto de rentas y Ley de apropiaciones que deberá corresponder al Plan Nacional de Desarrollo y lo presentará al Congreso, dentro de los 10 primeros días de cada legislatura. En la Ley de apropiaciones no podrá incluirse partida alguna que no corresponda a un crédito judicialmente reconocido, a un gasto decretado conforme a la Ley anterior, o a uno propuesto por el Gobierno para atender debidamente el funcionamiento de las Ramas del Poder Público, o al servicio de la deuda, o destinado a dar cumplimiento al Plan Nacional de Desarrollo..."

Artículo 86 de la Ley 38 de 1989:

"... El Gobierno formulará anualmente el presupuesto de rentas y Ley de apropiaciones que deberá corresponder al Plan Nacional de Desarrollo y lo presentará al Congreso, dentro de los 10 primeros días de cada legislatura. En la Ley de apropiaciones no podrá incluirse partida alguna que no corresponda a un crédito judicialmente reconocido, a un gasto decretado conforme a la Ley anterior, o a uno propuesto por el Gobierno para atender debidamente el funcionamiento de las Ramas del Poder Público, o al servicio de la deuda, o destinado a dar cumplimiento al Plan Nacional de Desarrollo..."

"... Todos los actos administrativos que afecten el presupuesto respectivo, tendrán que contar con el certificado de disponibilidad y registro presupuestal, en los términos de las leyes 38/89 y 174/94 Orgánica del Presupuesto y sus reglamentos...".

Artículo 72 de la Ley 270 de 1.996:

"... La responsabilidad de los funcionarios y empleados judiciales por cuya conducta dolosa o gravemente culposa haya sido condenado el Estado, será exigida mediante la acción civil de repelición de la que éste es titular, excepto el ejercicio de la acción civil respecto de conductas que puedan configurar hechos punibles. Dicha acción deberá ejercitarse por el representante legal de la entidad estatal condenada a partir de la fecha en que tal entidad haya realizado el pago de la obligación indemnizatoria a su cargo, sin perjuicio de las facultades que corresponden al Ministerio Público. Lo anterior no obsta para que en el proceso de responsabilidad contra la entidad estatal, el funcionario o empleado judicial pueda ser llamado en garantía...".

14

Es así que autorizar sin respaldo presupuestal el reconocimiento y pago de las diferencias salariales y prestacionales que reclama la peticionaria por concepto de Prima especial equivalente al 30% de la asignación básica mensual, por los tiempos de servicio en los que ha desempeñado el cargo de Juez de la República, en Despachos adscritos a la Seccional de Administración Judicial de Cartagena - Bolívar, desde el 01 de enero de 1993 hasta el 27 de enero de 2008, explícitamente indicados en la hoja 3 de este acto administrativo, sería actuar por fuera del ámbito de nuestra competencia y generaría a cargo de la entidad un detrimento fiscal, conforme a la norma de la Ley de Presupuesto Decreto 111 de 1996, que a la letra reza:

"...ARTICULO 112. Además de la responsabilidad penal a que haya lugar, serán fiscalmente responsables:

- a) Los ordenadores de gasto y cualquier otro funcionario que contraiga a nombre de los órganos oficiales obligaciones no autorizadas en la ley, o que expidan giros para pagos de las mismas;
- b) Los funcionarios de los órganos que contabilicen obligaciones contraídas contra expresa prohibición o emitan giros para el pago de las mismas;
- c) El ordenador de gastos que solicite la constitución de reservas para el pago de obligaciones contraídas contra expresa prohibición legal;
- d) El pagador y el auditor fiscal que efectúen y autoricen pagos, cuando con ellos se violen los preceptos consagrados en el presente estatuto y en las demás normas que regulan la materia.

PARAGRAFO. Los ordenadores, pagadores, auditores y demás funcionarios responsables q estando disponibles los fondos y legalizados los compromisos demoren sin justa causa cancelación o pago, incurrirán en causal de mala conducta (Ley 38/89, artículo 89. Ley 179/94, artículo 55. Inciso 3o y 16, y artículo 71)....".

Al respecto la Corte Constitucional, en la sentencia C-337 de agosto 19 de 1993 (M.P. Vladimiro Naranjo mesa), expresó:

"Leyes orgánicas, concepto.

(...) Así las cosas, las normas orgánicas del presupuesto regulan y limitan la actividad de las diferentes entidades y órganos del Estado, tanto en los actos que pueden realizar en el ejercicio de sus funciones que conllevan ejecución presupuestal, como en las formalidades y requisitos que deben cumplir. De tal suerte que todos los actos administrativos que afecten el presupuesto

Hoja No 9 de la Resolución No **5300** del **04 AGO. 2016** por
medio de la cual se resuelve un Recurso de Apelación de la doctora OLGA ITALINA
SALVADOR BETANCUR

respectivo, tendrán que contar con el certificado de disponibilidad presupuestal en los términos de la Ley 38 de 1989 y 179 de 1994 orgánicas de presupuesto." (Subrayas fuera de texto).

Este proceder estaría además inmerso en implicaciones de tipo disciplinario como las consagradas en la Ley 734 de febrero 5 de 2002, que en sus artículos 22 y 23, frente a la función pública y la falta disciplinaria, señalan lo siguiente:

"... ARTÍCULO 22. GARANTÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. El sujeto disciplinable, para salvaguardar la moralidad pública, transparencia, objetividad, legalidad, honradez, lealtad, igualdad, imparcialidad, celeridad, publicidad, economía, neutralidad, eficacia y eficiencia que debe observar en el desempeño de su empleo, cargo o función, ejercerá los derechos, cumplirá los deberes, respetará las prohibiciones y estará sometido al régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflictos de intereses, establecidos en la Constitución Política y en las leyes.

ARTÍCULO 23. LA FALTA DISCIPLINARIA. Constituye falta disciplinaria, y por lo tanto da lugar a la acción e imposición de la sanción correspondiente, la incursión en cualquiera de las conductas o comportamientos previstos en este código que conlleve incumplimiento de deberes, extralimitación en el ejercicio de derechos y funciones, prohibiciones y violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses, sin estar amparado por cualquiera de las causales de exclusión de responsabilidad contempladas en el artículo 28 del presente ordenamiento....".

De las disposiciones y jurisprudencia transcritas se deriva que la administración judicial no puede generar ni disponer reconocimientos y pagos de nivelaciones salariales o prestacionales, sin contar previamente con la respectiva disponibilidad presupuestal que dé cuenta de la existencia de los recursos necesarios para asumir el gasto y cumplir con obligaciones que le impongan la ley y las sentencias judiciales.

- Resulta pertinente anotar, por otra parte, que en materia de competencia, conforme está consagrado en el artículo 150, numeral 19, literales E) y F) de la Constitución Política, le corresponde al Congreso de la República fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la fuerza pública y regular el régimen de prestaciones sociales mínimas de los trabajadores oficiales.

En ejercicio de dicha facultad el Legislativo expidió la Ley 4ª del 18 de mayo de 1992, mediante la cual autoriza al Gobierno Nacional para fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, entre estos los de la Rama Judicial, la Fiscalía General de la Nación, los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales, para lo cual debe tener en cuenta, entre otros, los siguientes objetivos y criterios: El respeto de los derechos adquiridos tanto del régimen general, como de los especiales; La sujeción al marco general de la política

exclusivamente en el Gobierno Nacional, es decir que es éste, basado en la Constitución y la Ley, quien determina dichas asignaciones.

La Ley 4ª de 1992 estipuló en su artículo 14, con relación a la remuneración de algunos servidores judiciales, entre ellos los Magistrados de Tribunal Superior y Contencioso Administrativo, los jueces de la República y otros cargos similares, el reconocimiento y pago de la Prima objeto del presente debate, en los siguientes términos:

"...El Gobierno Nacional establecerá una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del salario básico, sin carácter salarial, para los Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, Agentes del Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y para los Jueces de la República, incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar, excepto los que opten por la escala de salarios de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del primero (1o.) de enero de 1993.

15

...PARÁGRAFO. Dentro del mismo término revisará el sistema de remuneración de funcionarios y empleados de la Rama Judicial sobre la base de la nivelación o reclasificación atendiendo criterios de equidad." (Subrayas y negrillas fuera de texto).

Es del caso anotar que sobre la expresión "sin carácter salarial" se pronunció la H. Corte Constitucional en sentencia C-279 de 24 de junio de 1996, en el trámite de la Acción Pública de Inconstitucionalidad promovida, entre otros, contra algunos apartes de la Ley 4ª de 1992, en los siguientes términos:

"...Igualmente, la Corte Constitucional, ha sostenido que "el legislador conserva una cierta libertad para establecer, que componentes constituyen, o no salario, así como la de definir y desarrollar el concepto de salario, pues es de su competencia desarrollar la Constitución.

Las definiciones de convenios internacionales que transcribe la actora no significan que el legislador nacional haya perdido la facultad de tomar o no en cuenta una parte de la remuneración que perciben los trabajadores para definir las bases sobre las cuales han de hacerse otros pagos.

Así pues, el considerar que los pagos por primas técnicas y especiales no sean factor salarial, no lesiona los derechos de los trabajadores, y no implica una omisión o un incorrecto desarrollo del especial deber de protección que el Estado colombiano tiene en relación con el derecho al trabajo, ni se aparta de los deberes que Colombia ha adquirido ante la comunidad internacional. ..."

Mediante la referida sentencia C-279 de 1996 la Corte resolvió:

"...Declarar exequibles las siguientes disposiciones legales:

...La frase "sin carácter salarial" del artículo décimo cuarto de la ley 4ª de 1992. ..." (Subrayas y negrillas propias).

Posteriormente, con la entrada en vigencia de la Ley 332 del 19 de diciembre de 1996, que modificó la Ley 4ª de 1992 y dictó otras disposiciones, se levantó parcialmente el carácter no salarial al artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, al establecer dicha norma en su ARTÍCULO 1º:

Agosto 8 de 2016

Hoja No 11 de la Resolución No **5300** del **04 AGO. 2016** por
medio de la cual se resuelve un Recurso de Apelación de la doctora OLGA ITALINA
SALVADOR BETANCUR

"La prima especial prevista en el primer inciso del artículo 14 de la Ley 4a. de 1992, para los funcionarios allí mencionados y para los fiscales de la Fiscalía General de la Nación, con la excepción allí consagrada, que se jubilen en el futuro, o que teniendo reconocida la pensión de jubilación aún se encuentren vinculados al servicio, hará parte del ingreso base únicamente para efectos de la liquidación de la pensión de jubilación, para lo cual se harán las cotizaciones de pensiones establecidas por la ley.

La anterior prima con las mismas limitaciones, también se aplicará a los Magistrados Auxiliares y abogados asistentes de las Altas Cortes, Magistrados de los Consejos Seccionales de la Judicatura, Magistrados del Tribunal Nacional, y Magistrados del extinto Tribunal Disciplinario y los Procuradores Delegados de la Procuraduría General de la Nación." (Subrayas y negrillas fuera de texto).

Sobre el particular la Corte Constitucional, en Sentencia C-447-97 del 18 de septiembre de 1997, Magistrado Ponente: Dr. JORGE ARANGO MEJIA, al pronunciarse sobre la demanda incoada contra apartes del artículo 1º de la Ley 332 de 1996, señaló:

"...La modificación que introdujo el artículo 1º de la ley 332 de 1996, consistió en asignarle carácter salarial a esta prima, pero sólo para efectos pensionales, naturaleza que no tenía por expresa disposición del artículo 14 transcrito.

(...)

Finalmente, es necesario recordar que en sentencia C-279 de 1996, la Sala de Conjuces de la Corte Constitucional, en relación con una demanda en contra del artículo 14 de la ley 4ª de 1992, definió la constitucionalidad de la prima especial que, sin carácter salarial, podían recibir algunos servidores públicos. En dicho fallo, se señaló lo siguiente:

"Este entendimiento de la norma es el único que racionalmente cabe hacer, ya que aún cuando habitualmente se ha tomado el salario como la medida para calcular las prestaciones sociales y las indemnizaciones que legalmente se establecen en favor del trabajador, no existe ningún motivo fundado en los preceptos constitucionales que rigen la materia o en la recta razón, que impida al legislador disponer que determinada prestación social o indemnización se liquide sin consideración al monto total del salario del trabajador, esto es, que se excluyan determinados factores no obstante su naturaleza salarial, y sin que pierdan por ello tal carácter

(...)

Es decir, se avaló la exclusión de la prima como factor salarial, a pesar de tener los elementos mínimos para ser considerada como salario. Argumento adicional, para afirmar que, cuando el legislador optó por modificar la naturaleza de esta prima, no desconoció derecho alguno de los pensionados bajo el régimen de la ley 4ª de 1992." (Negrillas y subrayas fuera de texto).

Como se puede observar, por expreso mandato de la Ley 4ª de mayo 18 de 1992, establecido en su artículo 14, la Prima allí instituida no tiene carácter salarial, criterio que fue reafirmado por la

89

Se deduce en consecuencia, de conformidad con la normatividad y jurisprudencia citadas, que el carácter salarial de la Prima establecida en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, para Magistrados de Tribunal, Jueces y otros servidores, fue restringido expresamente por el legislador al señalar que: "...tendrá carácter salarial para efectos de la determinación del salario base de liquidación de la pensión de jubilación.", quedando incólume por lo tanto la condición de no constituir factor de salario para la liquidación y pago de las prestaciones sociales, posición que no contradice los mandatos constitucionales, toda vez que la propia Constitución faculta al legislador para regular el régimen salarial y prestacional de los servidores públicos, de ahí que tenga la libertad para establecer que determinadas prestaciones sociales se liquiden sin consideración al monto total del salario, es decir, que cierta parte del salario no constituya factor para ciertos eventos, como es el caso de la citada prima.

16

En este estado del debate es necesario reiterar igualmente, que mediante la sentencia del 29 de abril de 2014 el Consejo de Estado decretó únicamente la nulidad de los artículos que en los decretos de salarios de la Rama Judicial de los años 1993 a 2007 establecieron que se considera como Prima sin carácter salarial el 30% de la asignación básica de los cargos allí enlistados, sin efectuar pronunciamiento alguno sobre disposiciones idénticas de los años posteriores, reunidas para los servidores del régimen de los ACOGIDOS, al cual pertenece la peticionaria, en los Decretos de salarios Nos.: 658 de 2008, 723 de 2009, 1388 de 2010, 1039 de 2011, 874 de 2012 y 1024 de 2013.

Para el año 2014 el Gobierno Nacional expidió el Decreto 194 de 07 de febrero, norma que actualmente permanece vigente, como ya se indicó anteriormente, y que en lo concerniente dispone:

"ARTÍCULO 8. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, se considerará como Prima, sin carácter salarial, el treinta por ciento (30%) del salario básico mensual de los Magistrados Auxiliares de las Altas Cortes, de los Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, de los Jueces de la República..." (Negritas y subrayas propias).

De manera que es oportuno precisar al respecto, de una parte, que los Decretos que fijan las asignaciones salariales y prestacionales de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial tienen vigencia anualizada, es decir que rigen por el periodo comprendido entre el 1º de enero y hasta el 31 de diciembre del respectivo año calendario o hasta que sean derogados por norma posterior, y por la otra, que mientras la norma esté vigente, a la Administración Judicial solo le corresponde darle estricto y cabal cumplimiento, pues como autoridad administrativa, agente del Estado y garante del principio de legalidad, está sometida al imperio de la ley y obligada a aplicar el derecho vigente.

De conformidad con lo expuesto es evidente para esta Dirección Ejecutiva que la Prima especial establecida por el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 constituye un ingreso mensual, pero no por ello puede desconocer que la misma ley limita el carácter salarial de dicho concepto, de donde se concluye que no es factor para la liquidación y pago de las prestaciones sociales, situación que fue estudiada y declarada exequible por la Corte Constitucional.

Es necesario agregar por otra parte, que en virtud de las disposiciones legales que crearon a favor de los Magistrados de Tribunal y otros cargos homólogos, la Bonificación por Compensación; Decretos 610 de 26 de marzo de 1998 y 1239 del 02 de julio de 1998.

Agosto 8 de 2016

Hoja No 13 de la Resolución No 5300 del 04 AGO. 2016 por
medio de la cual se resuelve un Recurso de Apelación de la doctora OLGA ITALINA
SALVADOR BETANCUR

mismo año, "Por el cual se adiciona el Decreto número 610 del 26 de marzo de 1998", Decreto 4040 del 03 de diciembre de 2004, "Por el cual se crea una Bonificación por Gestión Judicial para los Magistrados de Tribunal y otros funcionarios", declarado nulo por el Consejo de Estado mediante sentencia del 14 de diciembre de 2011, y actualmente el Decreto 1102 del 24 de mayo de 2012, "Por el cual se modifica la Bonificación por Compensación para los Magistrados de Tribunal y otros funcionarios", la remuneración anual de los mencionados funcionarios fue delimitada a sumas equivalentes al sesenta por ciento (60%), setenta por ciento (70%) y ochenta por ciento (80%) de lo que por todo concepto devenga anualmente el Magistrado de Alta Corte, dependiendo de la vigencia que corresponda, que taxativamente fue determinada en las normas en cita.

Por ende, la cuantía que se cancela por Bonificación por Compensación como no es un valor absoluto que se encuentre establecido en algún decreto salarial, sino que corresponde a la diferencia entre lo proyectado como ingresos anuales del Magistrado de Alta Corte y los ingresos anuales del Magistrado de Tribunal y demás cargos equivalentes, monto que se determina al efectuar un cálculo matemático en el que se toman todos los conceptos que componen los ingresos totales de dichos servidores, aunado a que por mandato legal la Bonificación por Compensación y la Prima Especial mensual constituyen factor salarial únicamente para efectos de calcular el IBC del Sistema General de Salud y Pensiones, en los términos de la Ley 797 de 2003, al liquidarse como lo solicita e interpreta la peticionaria, es decir como un valor adicional a la remuneración mensual, se incrementarían los ingresos tanto mensuales como anuales, lo cual implicaría tener que efectuar un recálculo de dichas operaciones matemáticas, para ajustar todos los pagos efectuados administrativamente o en cumplimiento de fallo judicial por concepto de salarios y prestaciones legales, de manera tal que no se supere el porcentaje señalado como monto máximo de la remuneración que le corresponde al Magistrado de Tribunal. Tanto así que de accederse a peticiones en este sentido, habría lugar a solicitar a la funcionaria judicial el reintegro de los mayores valores pagados.

- Respecto a las sentencias del Consejo de Estado que el apoderado cita como fundamento de la reclamación, se debe acotar que los citados pronunciamientos fueron emitidos en conocimiento de las acciones de Nulidad y Nulidad y Restablecimiento del Derecho previstas en el Decreto 01 de 1984.
- En Acción de simple Nulidad fue proferido el fallo de fecha 29 de abril de 2014, que declaró la nulidad de los artículos que en los decretos anuales de salarios de la Rama Judicial de los años 1993 a 2007 dispusieron que el 30% de la asignación básica de los cargos allí enlistados, entre ellos el de Juez de la República, se consideraba como Prima sin carácter salarial.

Nos referiremos inicialmente a las características y particularmente a los efectos de estos pronunciamientos, expuestos por la H. Corte Constitucional en Sentencia C-426 de fecha 29 de mayo de 2002, Magistrado Ponente Dr. RODRIGO ESCOBAR GIL, en los siguientes términos:

(...)

Bajo este entendido, consultando el espíritu de la Constitución y de la ley, se tiene que la acción de simple nulidad procede contra todos los actos administrativos, generales y particulares, cuando la pretensión es únicamente la de tutelar el orden jurídico, caso en el cual la competencia del juez se limita a decretar la simple anulación sin adicionar ninguna otra declaración, pese a que con el retiro del acto impugnado eventualmente se restablezcan derechos o se ocasionen daños al actor o a terceros. Siguiendo este mismo razonamiento, si lo que persigue el demandante es un pronunciamiento anulatorio y la consecuente reparación de los daños antijurídicos causados, lo que cabe es la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, a ejercitarse dentro del término de caducidad a que hace expresa referencia el numeral 2º del artículo 136 del C.C.A., para que el juez proceda no sólo a decretar la nulidad del acto sino también al reconocimiento de la situación jurídica individual que ha resultado afectada.

(...)

Así, cuando una persona con interés directo pretenda demandar un acto de contenido particular y concreto, podrá alternativamente acudir al contencioso de anulación por dos vías distintas. Invocando la acción de nulidad y restablecimiento del derecho (C.C.A. art. 85), caso en el cual lo hace motivada por el interés particular de obtener el restablecimiento del derecho o la reparación del daño antijurídico como consecuencia de la declaratoria de la nulidad del acto. En la medida en que esta acción no se intente o no se ejerza dentro de los cuatro meses de que habla la ley (C.C.A. art. 136-2), quien se considere directamente afectado o un tercero, podrán promover la acción de simple nulidad en cualquier tiempo (C.C.A. arts. 84 y 136-1), pero única y exclusivamente para solicitar de la autoridad judicial la nulidad del acto violador, dejando a un lado la situación jurídica particular que en éste se regula, para entender que actúan por razones de interés general: la de contribuir a la integridad del orden jurídico y de garantizar el principio de legalidad frente a los excesos en que pueda incurrir la Administración en el ejercicio del poder público. En estos casos, la competencia del juez contencioso administrativo se encuentra limitada por la pretensión de nulidad del actor, de manera que, en aplicación del principio dispositivo, aquél no podrá adoptar ninguna medida orientada a la restitución de la situación jurídica particular vulnerada por el acto. ...

...Siguiendo este razonamiento, en el entendido que la procedencia de una u otra acción está determinada por la pretensión que se formule ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, es menester precisar que cuando se demanda por vía de la acción de simple nulidad un acto de contenido particular y concreto que crea o reconoce un derecho subjetivo, pese a que el mismo haya sido declarado nulo en la respectiva sentencia, el juez de la causa está obligado a mantener intangible el derecho en cuestión ya que, como se ha venido explicando, el pronunciamiento judicial en estos casos es única y exclusivamente de legalidad en abstracto. ..." (Subrayas y negritas fuera de texto).

Sobre los efectos en el tiempo de las sentencias que declaran la Nulidad simple de un acto administrativo general, el Consejo de Estado se ha pronunciado en abundante jurisprudencia, manifestado que si bien es cierto no hay una regulación expresa que responda esa inquietud jurídica, pues el Código Contencioso Administrativo se limitó a determinar que el fallo es obligatorio una vez en firme (artículo 174 del C.C.A.) y a afirmar que esta clase de acciones hace tránsito a cosa juzgada erga omnes, la regla general es que los efectos de esos fallos son ex tunc, esto es, desde que se expidió el acto anulado, pero sin desconocer o afectar las situaciones jurídicas consolidadas antes de la fecha de

Agosto 8 de 2016

Hoja No 15 de la Resolución N^o 5300 del 04 AGO. 2016 por
medio de la cual se resuelve un Recurso de Apelación de la doctora OLGA ITALINA
SALVADOR BETANCUR

la sentencia, pues no se pueden desconocer los derechos surgidos y afirmados durante la vigencia de las normas declaradas nulas.2

Es así que en sentencia del 05 de julio de 2006, Radicación No. 25000-23-26-000-1999-00482-02(21051), Consejera Ponente Dra. Ruth Stella Correa Palacio, la Corporación señaló:

"...Ahora, la nulidad de un acto administrativo general si bien es cierto que la jurisprudencia tiene determinado que produce efectos ex tunc ("desde entonces")3, esto es, desde el momento en que profirió el acto anulado por lo que las cosas deben retrotraerse al estado en que se encontraban ante de la expedición del acto, no es menos cierto que la jurisprudencia también tiene establecido que ello en modo alguno significa que dicha declaratoria afecte situaciones concretas e individuales que se hayan producido en vigencia del mismo...

(...)

...como certemente apunta la jurisprudencia, la nulidad del acto general no tiene vocación de restablecer automáticamente derechos de particulares por cuanto cada determinación de alcance particular que haya adoptado la Administración mantiene su presunción de legalidad, la cual solo puede ser desvirtuada a través de las acciones creadas al efecto. ..." (Negritas y subrayas propias).

De lo expuesto se colige que la Acción de Nulidad procede contra todos los actos administrativos generales y particulares, cuando la pretensión es únicamente la de tutelar el orden jurídico, caso en el cual la competencia del juez se limita a decretar la simple anulación sin adicionar ninguna otra declaración, pese a que con el retiro del acto impugnado eventualmente se restablezcan derechos o se ocasionen daños al actor o a terceros. Además, que a juicio del máximo órgano de cierre en lo Contencioso Administrativo, los fallos emitidos en conocimiento de esta acción NO tienen la vocación de restablecer automáticamente derechos particulares, lo que guarda relación con la posición del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, acerca de que dichos proveídos NO son títulos constitutivos de gasto, en razón a que en nuestro ordenamiento jurídico no existe la nulidad de pleno derecho de los actos administrativos particulares que se expidan con fundamento en uno general que haya sido anulado.

- En cuanto al fallo de 19 de mayo de 2010, Radicación número: 25000-23-25-000-2005-01134-01(0419-07), Actor: Dra. Leonor Chacón Antía, Juez de la República, es menester indicar que dicha sentencia fue proferida en el trámite de una Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, cuyas características y efectos, siguiendo con lo expresado por la Corte Constitucional en Sentencia C-426 del 29 de mayo de 2002, Magistrado Ponente: Dr. RODRIGO ESCOBAR GIL, son en síntesis: - Que sólo puede ejercerse por quien demuestre un interés, esto es, por quien se considere afectado en un derecho suyo amparado por un precepto legal. - Que se promueve no solo para garantizar la legalidad en abstracto, sino también para obtener el

reconocimiento de una situación jurídica particular y la adopción de las medidas adecuadas para su pleno restablecimiento o reparación. - Que tiene un término de caducidad de cuatro meses. - Que cuando se ejerce la acción de nulidad y restablecimiento del derecho y a través de la sentencia se obtiene la nulidad del acto y el reconocimiento de una situación jurídica particular y concreta, el efecto restablecedor sólo es predicable de las partes en contienda, esto es, de quienes promovieron y obtuvieron tal declaración, previsión legal que fue ratificada en el artículo 189 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo actualmente vigente.

Es así que en la parte resolutive del aludido fallo el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, resolvió:

"1. INAPLICASEN por Inconstitucionales los artículos 7 de los Decretos Nos. 2740 de 2000 y 2720 de 2001 y 6 de los Decretos Nos. 673 de 2002 y 3569 de 2003, en cuanto previeron como Prima, sin carácter salarial, el treinta por ciento (30%) del salario básico mensual devengado por Leonor Chacón Antía en su calidad de Juez Catorce de Familia de Bogotá, D.C.

2. DECLÁRASE la nulidad parcial del Oficio DRH-1627 de 3 de octubre de 2003, que negó el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales, liquidadas con base en el 30% de la prima especial devengada a partir del año 1993; de la Resolución No. 1939 de 3 de agosto de 2004, que resolvió el recurso de reposición interpuesto...

3. CONDÉNASE a la Nación- Dirección Ejecutiva de Administración Judicial- a reconocer y pagar a la actora a título de restablecimiento del derecho, la suma que resulte como diferencia de la reliquidación de las prestaciones legales desde... con base en la asignación mensual más la prima especial mensual..." (Subrayas y negritas propias).

Tenemos en consecuencia, que en términos resarcitorios los fallos proferidos en el trámite de Acciones de Nulidad y Restablecimiento del Derecho solo surten efectos respecto de quienes promovieron las demandas y obtuvieron sentencia a su favor, como ocurre con el proveído referido anteriormente, cuyos efectos se predicán únicamente de la señora Juez de Familia, doctora LEONOR CHACÓN ANTÍA.

De tal manera que no es posible, como lo pretende el apoderado, que la Administración Judicial pueda disponer con fundamento en los aludidos fallos, el reconocimiento y pago a favor de su poderdante, de las diferencias por concepto de salarios, prestaciones sociales y Prima especial equivalente al 30% de la asignación básica mensual, por los tiempos de servicio en los que ha desempeñado el cargo de Juez de la República v/o Magistrado(a) en Despachos adscritos a la Seccional de Administración Judicial de Cartagena - Bolívar, desde el 01 de enero de 1993 hasta el 27 de enero de 2008 explícitamente indicados en la hoja 3 de este acto administrativo, y particularmente el fallo del 29 de abril de 2014, el cual quedó ejecutoriado el 22 de julio de 2014, por cuanto el propósito de éste pronunciamiento fue decretar la nulidad de algunos artículos de los decretos de salarios de los años 1993 a 2007, más no el reconocimiento de derecho alguno a favor de persona determinada.

- En este punto del análisis del recurso propuesto es necesario hacer un paréntesis, para enfatizar que la Entidad no desconoce el deber que le impone el actual Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011, vigente a partir del 02 de julio de 2012, respecto de aplicar de manera



18

Agosto 8 de 2016

Hoja No 17 de la Resolución No- 5300 del 04 AGO. 2016 por
medio de la cual se resuelve un Recurso de Apelación de la doctora OLGA ITALINA
SALVADOR BETANCUR

uniforme las disposiciones legales y la jurisprudencia a situaciones que tengan los mismos supuestos fácticos y jurídicos, para lo cual se deben tener en cuenta "...las sentencias de unificación jurisprudencial del Consejo de Estado en las que se interpreten y apliquen dichas normas ...", disposición de la que es posible concluir con absoluta seguridad, que los fallos referidos por el apoderado no se constituyen en sentencias de unificación jurisprudencial.

Lo anterior considerando además, que una sentencia de esas características debe tener un título que la identifique como UNIFICADORA y que en ella se integren varias jurisprudencias o precedentes referidos a un mismo tema, acumulados por unidad de materia, de manera que de su simple lectura se derive el reconocimiento de los derechos reclamados por quienes acrediten los mismos supuestos fácticos y jurídicos en ella tratados, pronunciamiento que la administración tiene certeza a la fecha no se ha producido y que confirma el AUTO de fecha 1º de febrero de 2013, proferido por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, Consejera Ponente: Dra. MARTHA TERESA BRICEÑO DE VALENCIA, en el que al resolver sobre el asunto Radicado número: 11001-03-27-000-2012-00045-00(19718), previene:

"...que de conformidad con el artículo 102 del C.P.A.C.A. «Las autoridades deberán extender los efectos de una sentencia de unificación jurisprudencial dictada por el Consejo de Estado, en la que se haya reconocido un derecho, a quienes soliciten y acrediten los mismos supuestos fácticos y jurídicos. (...)». (Negrillas fuera de texto).

De lo dispuesto en los artículos 270 y 271 del C.P.A.C.A. se establecen cuáles son las sentencias de unificación jurisprudencial cuyos efectos pueden ser extendidos a terceros por las autoridades, así:

- *Las que profera o haya proferido el Consejo de Estado por importancia jurídica o trascendencia económica o social o por necesidad de unificar la jurisprudencia.*
- *Las proferidas al decidir los recursos extraordinarios.*
- *Las relativas al mecanismo eventual de revisión previsto en el artículo 36 A de la Ley 270 de 1996.*

Respecto de las sentencias por importancia jurídica o trascendencia económica o social o por necesidad de unificar la jurisprudencia, debe precisarse que el artículo 271 del C.P.A.C.A. prevé que las puede proferir:

(i) La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en los asuntos pendientes de fallo, de oficio o a solicitud de parte, o por remisión de las secciones o subsecciones o de los tribunales, o a petición del Ministerio Público.

(ii) Las secciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado en relación con los asuntos que provengan de las subsecciones de la corporación o de los tribunales, según el caso.

debe adelantarse el procedimiento previsto en el artículo 271 ib., el cual no existía para la época en que se expedieron dichas sentencias, y que tiene precisamente como objeto que la Sección se pronuncie con la finalidad expresa de constituirse en unificadoras de jurisprudencia o de tener el carácter de una decisión de importancia jurídica o de trascendencia social o económica, respecto de asuntos de los Tribunales. (Subrayas, negrillas y resaltado propios).

Del texto transcrito se entiende que una sentencia de unificación jurisprudencial debe estar precedida del procedimiento contemplado en el artículo 271 del Código Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, trámite que tiene por objeto que la Sección correspondiente se pronuncie con la finalidad expresa de constituirse en unificadora de jurisprudencia sobre asuntos de los Tribunales; formalidad que evidentemente a la fecha no se ha dado sobre el tema objeto de esta reclamación, como quiera que ni en ésta ni en otras peticiones sobre el mismo asunto, se ha siquiera mencionado el hecho de haberse proferido ya una SENTENCIA DE UNIFICACION JURISPRUDENCIAL en los términos de la Ley 1437 de 2011.

Se concluye entonces de lo plasmado en precedencia, que la Seccional de Administración Judicial le ha cancelado a la *funcionaria* judicial, en su condición de Juez de la República y/o Magistrado(a) de los Despachos adscritos a esa sede, del 01 de enero de 1993 hasta el 27 de enero de 2008, expresamente señalados en la hoja 3 de este acto administrativo, la remuneración y las prestaciones sociales de acuerdo a la normatividad vigente en cada anualidad, normas que si bien es cierto del año 1993 al 2007 fueron declaradas nulas en los apartes concernientes a la Prima especial mensual del 30%, en fallo de Nulidad simple, del año 2008 a la fecha siguen vigentes y no han sido objeto de decisión alguna de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

Por todos los razonamientos antes expuestos esta Dirección considera inviable modificar la decisión objeto de impugnación, pues hacerlo le implicaría a la Administración Judicial tener que desacatar el ordenamiento legal vigente, modificando un régimen salarial claramente definido y establecido en la Ley, con las repercusiones penales, fiscales y disciplinarias que una decisión en ese sentido conlleva, razón suficiente para confirmar en todas sus partes el acto impugnado, el cual se entiende reforzado con los argumentos plasmados en esta resolución.

En consecuencia,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO - CONFIRMAR la decisión emitida por la Dirección Seccional de Administración Judicial de *Cartagena - Bolívar* en la *resolución 760 del 02 de junio de 2015*, por la cual resolvió no acceder a las pretensiones formuladas a través de *apoderado por la doctora OLGA ITALINA SALVADOR BETANCUR, identificada con C.C. No. 33,131.570 de Cartagena*, en su condición de *funcionaria* de la Rama Judicial como *Magistrada del Tribunal Administrativo de Bolívar*, relativas al reconocimiento y pago de diferencias por concepto de salarios, prestaciones sociales y Prima especial del 30%, de los tiempos de servicio comprendidos desde el 01 de enero de 1993 hasta el 27 de enero de 2008 expresamente reseñados en la hoja 3 de este acto administrativo, por las razones expuestas en la parte motiva del presente pronunciamiento.



ES FIEL COPIA TOMADA DE SU ORIGINAL
DIRECCION EJECUTIVA DE
ADMINISTRACION JUDICIAL

Agosto 8 de 2016

Hoja No 19 de la Resolución No **5300** del **04 AGO. 2016** por
medio de la cual se resuelve un Recurso de Apelación de la doctora OLGA ITALINA
SALVADOR BETANCUR

ARTICULO SEGUNDO - TÉNGASE como apoderado al doctor ALBERTO VÉLEZ BAENA, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 9,074.593 de Cartagena y Tarjeta Profesional No. 52.656 del Consejo Superior de la Judicatura, en los términos y para los fines del poder que le fue legalmente conferido.

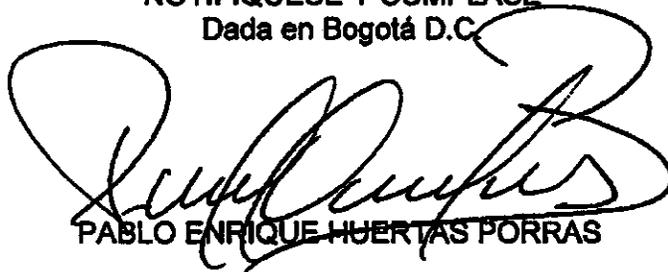
ARTICULO TERCERO - NOTIFÍQUESE por intermedio de la Seccional de Administración Judicial de Cartagena - Bolívar la presente decisión al apoderado, en los términos de la ley 1437 de 2011, haciéndole saber que contra la misma no procede recurso alguno y queda así agotado el trámite administrativo ante esta Entidad.

ARTICULO CUARTO - DEVUÉLVASE a la Seccional de Administración Judicial de Cartagena - Bolívar el cuaderno administrativo con los antecedentes del recurso, para el respectivo trámite legal.

ARTÍCULO QUINTO - La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C.



PABLO ENRIQUE HUERTAS PORRAS

04 AGO. 2016

Proyectó: Judhy Stella Velásquez Herrera

Revisa: Luis Abdenago Chaparro Galán

URH/Aprueba: Judith Morante García

N.Consueño.

JH9



Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Sala Administrativa
Dirección Seccional De Administración Judicial

93

OK
Agosto 1/16

LA COORDINADORA DEL AREA DE TALENTO HUMANO
CERTIFICA

Que la Señora OLGA ITALINA SALVADOR BETANCOURT identificada con la cédula de ciudadanía Número No. 33.131.570 registra Vinculación a la RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO desde el 29 de julio de 1971 y ha desempeñado los siguientes cargos :

90

CARGO	ESTADO FUNCIONARIO	DESPACHO	FECHA INI	FECHA FIN
JUEZ MUNICIPAL 00	PROPIEDAD	JUZGADO 004 CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA	29/07/1971	30/08/1973
JUEZ CIRCUITO 00	PROPIEDAD	JUZGADO 001 CIVIL DEL CIRCUITO DE CARTAGENA	31/08/1973	22/07/1988
MAGISTRADO TRIBUNAL O CONSEJO SECCIONAL 00	PROPIEDAD ✓	TRIBUNAL ADMINISTRATIVO 004 SIN SECCIONES DE BOLIVAR ✓	23/07/1988	27/01/2008 ✓

La presente constancia se expide en BOGOTA, 16/06/2016

VACANTE VACANTE VACANTE VACANTE





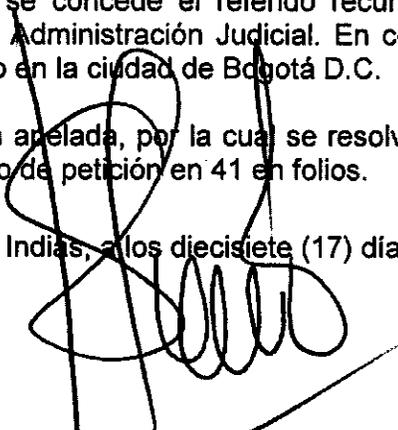
**Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Sala Administrativa
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Cartagena**

AUTO

Como quiera que el Doctor ALBERTO VELEZ BAENA, identificado con cédula de ciudadanía número 9.074.593 expedida en Cartagena, en su condición de apoderado de OLGA ITALINA SALVADOR BETANCOURT, identificada con cédula de ciudadanía número 33.131.570 expedida en Cartagena dentro del término legal interpuso el Recurso de Apelación contra la Resolución No. 760 del 02 de junio de 2015, proferida por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cartagena, por la cual se le resolvió una petición, se concede el referido recurso para ante el superior jerárquico, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. En consecuencia, se ordena el envío del mismo a ese Despacho en la ciudad de Bogotá D.C.

Se anexa la resolución apelada, por la cual se resolvió una petición, notificación personal de dicho acto y derecho de petición en 41 en folios.

Dado en Cartagena de Indias, a los diecisiete (17) días del mes de julio de 2015.


HERNANDO DARIO SIERRA PORTO
Director Seccional

ADB


DIRECCIÓN SECCIONAL
TIPO: RECURSO APELACION CONTRA RESOLUCION N.O. 760 DE 2015 -
OLGA SALVADOR BETANCOURT
REPRESENTANTE ALBERTO VELEZ BAENA
DISTRIBUIDO AREA ASISTENCIAL LEGAL SECCIONAL
BOGOTÁ 18 DE JUNIO DE 2015
TELÉFONO 4 444 4444
RECEBIDO POR ALICIA ESPINOSA FERRER
FECHA Y HORA 17/06/2015 02:34:23 PM
FIRMA 

94

Cartagena, Junio 30 de 2.015.

SEÑORES
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
CARTAGENA.

REFERENCIA: EJERCITAMIENTO RECLAMACIÓN
ACTO ADMINISTRATIVO CONTENIDO EN LA RESOLUCIÓN No.760 del 02 de Junio de 2.015 NOTIFICADA EN JUNIO 18/2015, de LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL-SECCIONAL BOLÍVAR, mediante el cual le fue denegada reclamación salarial y prestacional a la Dra. OLGA ITALINA SALVADOR BETANCOURT en su condición de EX MAGISTRADA DEL HONORABLE TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO JUDICIAL DE CARATAGENA.

21

ALBERTO VELEZ BAENA, mayor, identificado con la cédula de ciudadanía No. 9074593 expedida en Cartagena, con este memorial en mi condición de apoderado de la Dra. OLGA ITALINA SALAVADOR BETANCOURT, según poderes que fueron anexos al escrito de agotamiento de la vía gubernativa, dentro del término legal ejercito recurso de apelación en contra de la Resolución No. 760 del 02 de junio del 2015 de LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL-SECCIONAL BOLÍVAR, notificado personalmente el día 18 de Junio de 2015, mediante el cual le fue denegada reclamación salarial y prestacional a mi poderdante, la cual se materializó en escrito radicado en sede de la entidad el día 19 de Enero de 2.015.-

DE LA PETICIÓN PARA AGOTAR VÍA GUBERNATIVA:

Mediante escrito radicado a nombre de la Dra. OLGA ITALINA SALAVADOR BETANCOURT (ex magistrada del honorable tribunal administrativo del distrito judicial de Cartagena) recibido en sede de LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL-SECCIONAL BOLÍVAR el 19 de Enero /2015, se le solicitó a esa entidad re liquidara la prima especial de servicio que se le canceló a mi poderdante mensualmente, en una equivalencia al 30% sobre el salario básico y no como se le estuvo cancelando descomponiendo dicho salario básico en dos factores: 70% denominado salario básico y el restante 30% prima especial de servicios, toda vez que en razón como se liquidó esa prima especial, no cumplía lo prescrito en el art. 14 de la ley 4ª de 1.992, por cuanto con esta normativa lo que realmente se pretendía era crear una prima especial equivalente al 30% sobre el salario básico, no desvertebrar este en dos conceptos como se vino asumiendo.

La norma en que se fundamentó la prima especial, es del siguiente tenor ad litterem:

Art. 14 – ley 4ª/1992:

“El Gobierno Nacional establecerá una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del salario básico, sin carácter salarial, para los magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, agentes del Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y para los jueces de la República, incluidos los magistrados y fiscales del Tribunal Superior Militar, Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal

Parágrafo. *Dentro del mismo término revisará el sistema de remuneración de funcionarios y empleados de la rama judicial sobre la base de la nivelación o reclasificación atendiendo criterios de equidad". Ver Sentencia C 444 de 1997 Corte Constitucional.*

Con la petición de agotamiento de la vía gubernativa, se solicitó la aplicación a los fines de la re liquidación pretendida, de la sentencia del CONSEJO DE ESTADO-SALA DE CONJUECES- SECCIÓN SEGUNDA de fecha Abril 29 de 2014, Exp. 11001-03-25-000-2007-00087-00, M.P. Dra María Carolina Rodríguez Ruiz (Conjuez), en la cual se hizo claridad sobre el derecho involucrado en la generación de la prima especial creada en el art. 14 de la ley 4ª de 1992.-

OBJETO DEL RECURSO DE APELACIÓN:

Para que ante el Superior Jerárquico AL DESATARLO revoque el acto apelado de primer grado y en defecto de este, se acceda a reconocer la petición de re liquidar el salario, la prima especial y las prestaciones sociales con arreglo a lo resuelto en la sentencia de nulidad simple de fecha Abril 29 de 2014, Exp. 11001-03-25-000-2007-00087-00, M.P. Dra. María Carolina Rodríguez Ruiz (Conjuez).-

SUSTENTOS DEL ACTO RECURRIDO:

En la vía gubernativa fue denegada la reclamación formulada a nombre de la Dra. OLGA ITALINA SALVADOR BETANCOURT en su condición de EX MAGISTRADA DEL HONORABLE TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO JUDICIAL DE CARTAGENA con los siguientes fundamentos:

1. Que una vez revisada la información se constató que la dirección seccional le canceló los salarios y prestaciones sociales en su condición de Magistrada , mientras estuvo en servicio , como lo establecen e decreto 57 y 110 de 1.993 y subsiguientes, de conformidad con el certificado emitido por el coordinador de asuntos laborales del área de talento humano de la dirección seccional de administración judicial de Cartagena, por lo tanto no se accede a reconocer suma alguna por virtud de la nulidad declarada en la sentencia de Abril 29 de 2.014 del CONSEJO DE ESTADO SECCIÓN SEGUNDA , CONJUEZ María Carolina Rodríguez Ruíz .
2. Además para negar la reclamación se hacen precisiones en el acto recurrido verticalmente sobre los efectos de las sentencias de actos administrativos de carácter general.

OBSERVACIONES SOBRE LOS ARGUMENTOS MOTIVOS DEL ACTO RECURRIDO EN APELACIÓN:

La entidad parece ser que no hubiese leído la sentencia cuya aplicación se pretende a los fines de la reclamación que ha dado lugar a la apertura de la vía gubernativa del proceso administrativo de reclamación salarial, puesto que esta es ENFÁTICA en señalar, que el punto de partida para que se surtan los reclamos y conteo de los términos prescriptivos del derecho y caducidad de

"Ahora bien los efectos de la declaratoria de nulidad de los decretos demandados serán los mismos señalados en la sentencia del 2 de Abril de 2009 tantas veces mencionada, a saber:

"(...) es decir, no puede el intérprete de ninguna manera suponer que al desaparecer la prima especial sin carácter salarial equivalente al 30% de la remuneración mensual de tales empleados, su asignación para la época en que tuvo vigencia el decreto, sea el 70% de la escala remuneratoria allí prevista, se trata sencillamente de descargar el castigo de dicho 30% que conforme los términos de la norma invalidada, restringía en ese porcentaje las consecuencias prestacionales de tales servidores".

Los apartes anteriores debieron reportar claridad a la entidad sobre los efectos de la sentencia de nulidad simple, cuyos efectos se pretende sean considerados para resolver la petición que ocupa nuestra atención, lamentablemente la entidad impulsada por el ánimo de negar le da otros efectos. La sentencia en cuestión retrotrae las cosas a su estado inicial, es decir, para cuando se causaban los salarios y prestaciones sociales cuya re liquidación se deprecia, de manera que mientras los actos administrativos de carácter general tuvieron vida y estaban amparados de presunción de legalidad, las liquidaciones salariales y prestacionales igualmente gozaban de esa misma presunción, quiere decir, estaban liquidadas conforme a derecho, cuando desaparecen los actos generales del universo jurídico por sentencia judicial, por no haber procedido a cuantificar la prima especial de acuerdo con los parámetros patentes en la norma que la creó, desde la fecha de ejecutoria de dicha sentencia surge el derecho a reclamar con fundamento en esta. Todo lo anterior afortunadamente fue previsto en texto de la misma providencia de mérito en comentario, de tal manera QUE ES DESAFORTUNADA la respuesta de la entidad en el acto recurrido por cuanto le da una connotación distinta a los efectos del fallo; de tal manera que la entidad, antes de hacer esfuerzos para denegar las reclamaciones salariales y prestacionales que nos ocupan, lo que debe mirar con detenimiento, es la afectación del tesoro público nacional que devendrá con las sentencias que se han de proferir en los procesos en las cuales se acusen de nulidad los actos denegatorios, todo ello bajo lo prescrito en el art. 188 del CPACA (ley 1437/2011), en el cual queda estructurada LA CONDENA EN COSTAS OBJETIVA, es decir, sentencia en contra aparece condena en costas.-

Deniegan la reclamación de re liquidación deprecada por cuanto la competencia en la estructuración del régimen salarial de los servidores públicos compete al GOBIERNO NACIONAL.

Fundamentan este aparte del acto recurrido en los artículos 345, 346 Y 347 de la Carta y art. 71 del estatuto orgánico del presupuesto (D.111/1996); y art. 136m del C. penal .

OBSERVACIONES SOBRE EL ANTERIOR APARTE DEL ACTO DENEGATORIO RECURRIDO:

de un eventual proceso judicial al cual nos encaminamos, la única razón para no evitarlo es la solución de afectar el rublo de sentencias y conciliaciones con base en la sentencia condenatoria . Pero por igual se estaría afectando el patrimonio público innecesariamente por las costas del proceso (condena en costas del art. 188 del CPACA - ley 1437-2011).-

De otro lado observamos que la entidad no ha realizado el mínimo esfuerzo ante el MINISTERIO DE HACIENDA y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, a los fines de que se incluyan las partidas pertinentes para sufragar las re liquidaciones pretendidas, ni que decir de la falta de un análisis que tienda a explorar la posibilidad de transar directamente , fatalmente la única solución que se observa del acto impugnado es el proceso judicial.

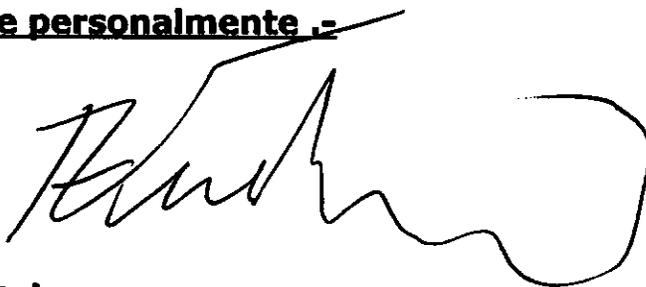
En los términos anteriores sustento EL RECURSO DE APELACIÓN para que al desatarlo se revoque en su integridad el acto recurrido verticalmente y en su defecto se acceda a re liquidar el salario y prestaciones de la causante con apego a lo dispuesto en la sentencia de Abril 29 de 2.014 del CONSEJO DE ESTADO SECCIÓN SEGUNDA , CONJUEZ María Carolina Rodríguez Ruíz .

NOTIFICACIÓN: Centro la Matuna Edificio Banco Popular Oficina 10-04, de Cartagena D. T. y C. Correo electrónico: albertovelezbaena50@yahoo.com

Ruego se me notifique personalmente .-

MUY ATENTAMENTE,

Alberto Vélez Baena
C.C. N. 9074593 de Cartagena
T.P. #52656 del C.S. de la J.-



Cartagena, Junio 25 de 2.015.

SEÑORES
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL-SECCIONAL BOLÍVAR.
CARTAGENA.

REFERENCIA: EJERCITAMIENTO RECURSOS DE APELACIÓN EN CONTRA DEL ACTO ADMINISTRATIVO CONTENIDO EN LA RESOLUCION No.760 del 02 de Junio de 2.015 NOTIFICADA EN JUNIO 18/2015, de LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL-SECCIONAL BOLÍVAR, mediante el cual le fue denegada reclamación salarial y prestacional a la Dra. OLGA ITALINA SALVADOR BETANCOURT en su condición de EX MAGISTRADA DEL HONORABLE TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO JUDICIAL DE CARATAGENA.

ALBERTO VELEZ BAENA, mayor, identificado con la cédula de ciudadanía No. 9074593 expedida en Cartagena, con este memorial en mi condición de apoderado de la Dra. OLGA ITALINA SALAVADOR BETANCOURT, según poderes que fueron anexos al escrito de agotamiento de la vía gubernativa, dentro del término legal ejercito recurso de apelación en contra de la Resolución No. 760 del 02 de junio del 2015 de LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL-SECCIONAL BOLÍVAR, notificado personalmente el día 18 de Junio de 2015, mediante el cual le fue denegada reclamación salarial y prestacional a mi poderdante, la cual se materializó en escrito radicado en sede de la entidad el día 19 de Enero de 2.015.-

DE LA PETICIÓN PARA AGOTAR VÍA GUBERNATIVA:

Mediante escrito radicado a nombre de la Dra. OLGA ITALINA SALAVADOR BETANCOURT (ex magistrada del honorable tribunal administrativo del distrito judicial de Cartagena) recibido en sede de LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL-SECCIONAL BOLÍVAR el 19 de Enero /2015, se le solicitó a esa entidad re liquidara la prima especial de servicio que se le canceló a mi poderdante mensualmente, en una equivalencia al 30% sobre el salario básico y no como se le estuvo cancelando descomponiendo dicho salario básico en dos factores: 70% denominado salario básico y el restante 30% prima especial de servicios, toda vez que en razón como se liquidó esa prima especial, no cumplía lo prescrito en el art. 14 de la ley 4ª de 1.992, por cuanto con esta normativa lo que realmente se pretendía era crear una prima especial equivalente al 30% sobre el salario básico, no desvertebrar este en dos conceptos como se vino asumiendo.

La norma en que se fundamentó la prima especial, es del siguiente tenor ad litterem:

Art. 14 - ley 4ª/1992:

"El Gobierno Nacional establecerá una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del salario básico, sin carácter salarial, para los magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, agentes del Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y para los jueces de la República, incluidos los magistrados y fiscales del Tribunal Superior Militar, Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar, excepto los que entran por la escala de salarios de la Fiscalía General de

2 - JUN 2015

H: 10:37
N.F: 4

23

Parágrafo. *Dentro del mismo término revisará el sistema de remuneración de funcionarios y empleados de la rama judicial sobre la base de la nivelación o reclasificación atendiendo criterios de equidad". Ver Sentencia C 444 de 1997 Corte Constitucional.*

Con la petición de agotamiento de la vía gubernativa, se solicitó la aplicación a los fines de la re liquidación pretendida, de la sentencia del CONSEJO DE ESTADO-SALA DE CONJUECES- SECCIÓN SEGUNDA de fecha Abril 29 de 2014, Exp. 11001-03-25-000-2007-00087-00, M.P. Dra María Carolina Rodríguez Ruiz (Conjuez), en la cual se hizo claridad sobre el derecho involucrado en la generación de la prima especial creada en el art. 14 de la ley 4ª de 1992.-

OBJETO DEL RECURSO DE APELACIÓN:

Para que ante el Superior Jerárquico AL DESATARLO revoque el acto apelado de primer grado y en defecto de este, se acceda a reconocer la petición de re liquidar el salario, la prima especial y las prestaciones sociales con arreglo a lo resuelto en la sentencia de nulidad simple de fecha Abril 29 de 2014, Exp. 11001-03-25-000-2007-00087-00, M.P. Dra. María Carolina Rodríguez Ruiz (Conjuez).-

SUSTENTOS DEL ACTO RECURRIDO:

En la vía gubernativa fue denegada la reclamación formulada a nombre de la Dra. OLGA ITALINA SALVADOR BETANCOURT en su condición de EX MAGISTRADA DEL HONORABLE TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO JUDICIAL DE CARTAGENA con los siguientes fundamentos:

1. Que una vez revisada la información se constató que la dirección seccional le canceló los salarios y prestaciones sociales en su condición de Magistrada , mientras estuvo en servicio , como lo establecen e decreto 57 y 110 de 1.993 y subsiguientes, de conformidad con el certificado emitido por el coordinador de asuntos laborales del área de talento humano de la dirección seccional de administración judicial de Cartagena, por lo tanto no se accede a reconocer suma alguna por virtud de la nulidad declarada en la sentencia de Abril 29 de 2.014 del CONSEJO DE ESTADO SECCIÓN SEGUNDA , CONJUEZ María Carolina Rodríguez Ruíz .
2. Además para negar la reclamación se hacen precisiones en el acto recurrido verticalmente sobre los efectos de las sentencias de actos administrativos de carácter general.

OBSERVACIONES SOBRE LOS ARGUMENTOS MOTIVOS DEL ACTO RECURRIDO EN APELACIÓN:

La entidad parece ser que no hubiese leído la sentencia cuya aplicación se pretende a los fines de la reclamación que ha dado lugar a la apertura de la vía gubernativa del proceso administrativo de reclamación salarial, puesto que esta es ENFÁTICA en señalar, que el punto de partida para que se surtan los reclamos y conteo de los términos prescriptivos del derecho y caducidad de

"Ahora bien los efectos de la declaratoria de nulidad de los decretos demandados serán los mismos señalados en la sentencia del 2 de Abril de 2009 tantas veces mencionada, a saber:

"(...) es decir, no puede el intérprete de ninguna manera suponer que al desaparecer la prima especial sin carácter salarial equivalente al 30% de la remuneración mensual de tales empleados, su asignación para la época en que tuvo vigencia el decreto, sea el 70% de la escala remuneratoria allí prevista, se trata sencillamente de descargar el castigo de dicho 30% que conforme los términos de la norma invalidada, restringía en ese porcentaje las consecuencias prestacionales de tales servidores".

Los apartes anteriores debieron reportar claridad a la entidad sobre los efectos de la sentencia de nulidad simple, cuyos efectos se pretende sean considerados para resolver la petición que ocupa nuestra atención, lamentablemente la entidad impulsada por el ánimo de negar le da otros efectos. La sentencia en cuestión retrotrae las cosas a su estado inicial, es decir, para cuando se causaban los salarios y prestaciones sociales cuya re liquidación se deprecia, de manera que mientras los actos administrativos de carácter general tuvieron vida y estaban amparados de presunción de legalidad, las liquidaciones salariales y prestacionales igualmente gozaban de esa misma presunción, quiere decir, estaban liquidadas conforme a derecho, cuando desaparecen los actos generales del universo jurídico por sentencia judicial, por no haber procedido a cuantificar la prima especial de acuerdo con los parámetros patentes en la norma que la creó, desde la fecha de ejecutoria de dicha sentencia surge el derecho a reclamar con fundamento en esta. Todo lo anterior afortunadamente fue previsto en texto de la misma providencia de mérito en comentario, de tal manera QUE ES DESAFORTUNADA la respuesta de la entidad en el acto recurrido por cuanto le da una connotación distinta a los efectos del fallo; de tal manera que la entidad, antes de hacer esfuerzos para denegar las reclamaciones salariales y prestacionales que nos ocupan, lo que debe mirar con detenimiento, es la afectación del tesoro público nacional que devendrá con las sentencias que se han de proferir en los procesos en las cuales se acusen de nulidad los actos denegatorios, todo ello bajo lo prescrito en el art. 188 del CPACA (ley 1437/2011), en el cual queda estructurada LA CONDENA EN COSTAS OBJETIVA, es decir, sentencia en contra apareja condena en costas.-

Denlegan la reclamación de re liquidación deprecada por cuanto la competencia en la estructuración del régimen salarial de los servidores públicos compete al GOBIERNO NACIONAL.

Fundamentan este aparte del acto recurrido en los artículos 345, 346 Y 347 de la Carta y art. 71 del estatuto orgánico del presupuesto (D.111/1996); y art. 136m del C. penal .

OBSERVACIONES SOBRE EL ANTERIOR APARTE DEL ACTO DENEGATORIO RECURRIDO:

de un eventual proceso judicial al cual nos encaminamos, la única razón para no evitarlo es la solución de afectar el rublo de sentencias y conciliaciones con base en la sentencia condenatoria . Pero por igual se estaría afectando el patrimonio público innecesariamente por las costas del proceso (condena en costas del art. 188 del CPACA – ley 1437-2011).-

De otro lado observamos que la entidad no ha realizado el mínimo esfuerzo ante el MINISTERIO DE HACIENDA y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, a los fines de que se incluyan las partidas pertinentes para sufragar las re liquidaciones pretendidas, ni que decir de la falta de un análisis que tienda a explorar la posibilidad de transar directamente , fatalmente la única solución que se observa del acto impugnado es el proceso judicial.

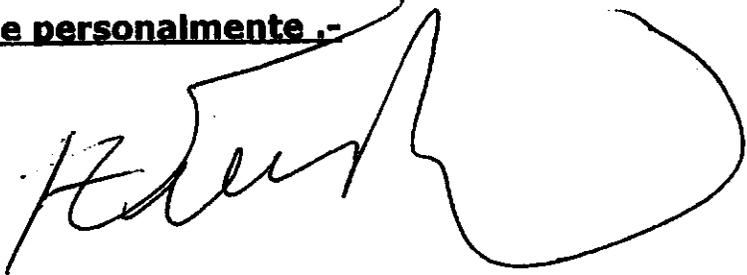
En los términos anteriores sustento EL RECURSO DE APELACIÓN para que al desatarlo se revoque en su integridad el acto recurrido verticalmente y en su defecto se acceda a re liquidar el salario y prestaciones de la causante con apego a lo dispuesto en la sentencia de Abril 29 de 2.014 del CONSEJO DE ESTADO SECCIÓN SEGUNDA , CONJUEZ María Carolina Rodríguez Ruíz .

NOTIFICACIÓN: Centro la Matuna Edificio Banco Popular Oficina 10-04, de Cartagena D. T. y C. Correo electrónico: albertovelezbaena50@yahoo.com

Ruego se me notifique personalmente .-

MUY ATENTAMENTE,

Alberto Vélez Baena
C.C. N. 9074593 de Cartagena
T.P. #52656 del C.S. de la J.-





Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Sala Administrativa
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Cartagena

98

Doctor
ALBERTO VELEZ BAENA
Cartagena

ASUNTO: Notificación personal, Respuesta Derecho de Petición.

Respetado doctor:

95

La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cartagena, mediante Resolución No.760 del 02 de junio de 2015, resolvió petición de fecha 19 de febrero de 2015, presentada por Usted, en representación de OLGA ITALINA SALVADOR BETANCUR, identificada con la cédula de ciudadanía número 33.131.570 de Cartagena, me permito notificarle del contenido de la misma, para lo cual se deja constancia de la entrega gratuita de un ejemplar del mencionado acto en diez (11) folios.

En el mencionado acto se resuelve derecho de petición instaurado por Usted, así mismo se le informa que contra la decisión que hoy se le notifica procede el recurso de reposición y apelación, los cuales deberán interponerse dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación del presente acto y ante la misma autoridad que lo profirió, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011, con el lleno de los requisitos establecidos en el artículo 77 de la misma ley.

ANGEL DONADO BARROS
Profesional Universitario Grado 11

Recibí lo enunciado y me doy por notificado personalmente:

ALBERTO VELEZ BAENA
C.C. N° 9.074.593 de Cartagena

Fecha:

Junio 18 / 2015

Hora:

8:40 PM



**Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Sala Administrativa
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Seccional Cartagena**

Oficio No. DESAJ15-98
Cartagena D. T. H. Junio 10 de 2015

Doctor
ALBERTO VELEZ BAENA
Centro - La Matuna – Edificio Banco Popular Oficina 10-04
Cartagena

Asunto: Citación para notificación personal de la Resolución No. 760 del 02 de junio de 2015 "Por la cual se resuelve una petición"

Me permito citarlo para que comparezca a esta oficina, ubicada en Centro, Calle del Cuartel, Edificio Cuartel del Fijo, Cra.5ª N 36 – 127, Piso 2. Área Jurídica, en el horario de 8:00 a 12:00 a.m. y de 01:00 a 05:00 p.m., en el término de cinco (05) días, contados a partir de la fecha de envío de esta comunicación, transcurridos los cuales, se procederá a realizar la notificación por aviso, de acuerdo con lo preceptuado por el artículo 69 del CPACA, para realizar diligencia de notificación personal de la Resolución No. 760 del 02 de junio de 2015 "Por la cual se resuelve una petición".


ANGEL DONADO BARROS
Profesional Universitario Grado 12
Área Jurídica

ADB.

Centro, Edificio Cuartel del Fijo, Carrera 5ta No. 36-127 Teléfonos: 6642408 /
6647808 Ext.104 Fax: 6645708
E-mail: dirseccgena@cendoj.ramajudicial.gov.co





99

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Sala Administrativa
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Cartagena

Hoja No. 1 Resolución No. 760 del 02 Junio de 2015

RESOLUCIÓN No. 760
(02 de Junio de 2015)

Por la cual se resuelve una petición.

EL DIRECTOR EJECUTIVO SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL

En ejercicio de sus facultades legales, estatutarias y, en especial, las conferidas por el artículo 13 y siguientes del CPACA, y por el numeral 6 del Artículo 103 de la Ley 270 de 1.996, y

CONSIDERANDO

Que la señora OLGA ITALINA SALVADOR BETANCUR, identificada con la cédula de ciudadanía número 33.131.570 de Cartagena, quien se ha desempeñado como Juez de la República desde el 29 de Julio de 1971 hasta el 22 de Noviembre de 1988; y como Magistrada de Tribunal desde el 23 de Julio de 1988 hasta el 27 de Enero de 2008, mediante escrito radicado ante esta Dirección Seccional, solicitó, a través de apoderado doctor ALBERTO VELEZ BAENA, identificado con C.C. No. 9.074.593 de Cartagena y Tarjeta Profesional de Abogado No. 52.656 del Consejo Superior de la Judicatura, se le reconozca por la condición antes anotada lo siguiente:

"Pretendo le sean reconocidas a mi poderdante las siguientes sumas y conceptos, por la diferencia entre lo que le fue cancelado bajo los decreto expedidos por el Gobierno Nacional declarados nulos v los subsiguientes por virtud del art. 148 del CPACA, V lo que le realmente le debieron liquidar bajo la Ley4° de 1992

AÑO	SALARIO MENSUAL DEVENGADO	PRIMA ESPECIAL DE SERVICIO (MENSUAL)	PRIMA ESPECIAL DE SERVICIO (ANUAL)
1993	\$ 1.812.500,00	\$ 543.750,00	\$ 6.525.000,00
1994	\$ 2.193.125,00	\$ 657.937,00	\$ 7.895.250,00
1995	\$ 2.587.888,00	\$ 776.368,00	\$ 9.316.396,00
1996	\$ 2.976.070,00	\$ 892.821,00	\$ 10.713.852,00
1997	\$ 3.214.158,00	\$ 964.247,00	\$ 11.570.968,00
1998	\$ 3.989.997,00	\$ 1.196.999,00	\$ 14.363.989,00

Centro, Edificio Cuartel del Fijo, Cra.5ª N 36 - 127, Piso 2. Cartagena
Teléfonos: 6642455 - 6602124 - Fax: 6645708
E-mail: dirseccgena@cendoj.ramajudicial.gov.co



Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Sala Administrativa
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Cartagena

Hoja No.2 Resolución No.760 del 02 Junio de 2015

1999	\$ 4.388.897,00	\$ 1.318.699,00	\$ 15.800.388,00
2000	\$ 4.794.102,00	\$ 1.438.230,00	\$ 17.258.767,00
2001	\$ 4.922.229,00	\$ 1.478.668,00	\$ 17.720.024,00
2002	\$ 5.154.559,00	\$ 1.546.367,00	\$ 18.556.412,00
2003	\$ 5.344.763,00	\$ 1.603.428,00	\$ 19.241.146,00
2004	\$ 5.583.899,00	\$ 1.689.169,00	\$ 20.030.036,00
2005	\$ 5.869.913,00	\$ 1.760.973,00	\$ 21.131.686,00
2006	\$ 6.163.410,00	\$ 1.848.023,00	\$ 22.188.276,00
2007	\$ 6.440.764,00	\$ 1.932.229,00	\$ 23.188.760,00
TOTAL			\$235.498.941,00

AÑO	PRIMA DE NAVIDAD	DE PRIMA DE NAVIDAD PAGADA	DIFERENCIA
1993	\$ 1.969.834,00	\$ 1.438.746,00	\$ 531.088,00
1994	\$ 2.383.500,00	\$ 1.817.824,00	\$ 565.676,00
1995	\$ 2.812.531,00	\$ 2.146.848,00	\$ 665.683,00
1996	\$ 3.234.408,00	\$ 2.471.074,00	\$ 763.334,00
1997	\$ 3.598.954,00	\$ 2.984.816,00	\$ 614.138,00
1998	\$ 4.467.674,00	\$ 3.475.301,00	\$ 992.373,00
1999	\$ 4.914.443,00	\$ 3.830.378,00	\$ 1.084.065,00
2000	\$ 5.368.047,00	\$ 4.199.191,00	\$ 1.168.856,00
2001	\$ 5.511.514,00	\$ 4.309.201,00	\$ 1.202.313,00
2002	\$ 5.771.661,00	\$ 4.508.492,00	\$ 1.263.169,00
2003	\$ 5.984.633,00	\$ 4.683.682,00	\$ 1.300.951,00
2004	\$ 6.230.003,00	\$ 4.868.775,00	\$ 1.361.228,00
2005	\$ 6.572.653,00	\$ 5.125.474,00	\$ 1.447.179,00
2006	\$ 6.901.289,00	\$ 5.390.787,00	\$ 1.510.502,00
2007	\$ 7.211.846,00	\$ 5.634.402,00	\$ 1.577.444,00

Centro, Edificio Cuartel del Fijo, Cra.5ª N 36 – 127, Piso 2. Cartagena
Teléfonos: 6642455 - 6602124 – Fax: 6645708
E-mail: dirseccgena@cendoj.ramajudicial.gov.co



100

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Sala Administrativa
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Cartagena

Hoja No.3 Resolución No.760 del 02 Junio de 2015

TOTAL	\$ 18.047.999,00
-------	------------------

AÑO	PRIMA DE SERVICIOS	DE PRIMA SERVICIO PAGADA	DE DIFERENCIA
1993	\$ 908.250,00	\$ 897.115,00	\$ 209.135,00
1994	\$ 1.096.562,00	\$ 843.509,00	\$ 253.053,00
1995	\$ 1.293.944,00	\$ 995.341,00	\$ 298.803,00
1996	\$ 1.488.035,00	\$ 1.144.643,00	\$ 343.392,00
1997	\$ 1.653.952,00	\$ 1.385.018,00	\$ 268.934,00
1998	\$ 2.053.185,00	\$ 1.610.435,00	\$ 442.750,00
1999	\$ 2.258.504,00	\$ 1.771.479,00	\$ 487.025,00
2000	\$ 2.466.964,00	\$ 1.934.988,00	\$ 531.976,00
2001	\$ 2.532.897,00	\$ 1.987.618,00	\$ 542.279,00
2002	\$ 2.652.450,00	\$ 2.081.438,00	\$ 571.014,00
2003	\$ 2.750.328,00	\$ 2.158.241,00	\$ 592.085,00
2004	\$ 2.863.089,00	\$ 2.246.730,00	\$ 616.359,00
2005	\$ 3.020.559,00	\$ 2.370.301,00	\$ 650.258,00
2006	\$ 3.171.588,00	\$ 2.488.815,00	\$ 682.773,00
2007	\$ 3.314.309,00	\$ 2.600.812,00	\$ 713.497,00
TOTAL			\$ 7.203.133,00

27

AÑO	PRIMA DE VACACIONES	DE PRIMA VACACIONES PAGADA	DE DIFERENCIA
1993	\$ 981.770,00	\$ 726.161,00	\$ 255.609,00
1994	\$ 1.187.942,00	\$ 878.655,00	\$ 309.287,00
1995	\$ 1.401.773,00	\$ 1.036.814,00	\$ 364.959,00
1996	\$ 1.612.037,00	\$ 1.192.336,00	\$ 419.701,00

Centro, Edificio Cuartel del Fijo, Cra.5ª N 36 – 127, Piso 2. Cartagena
Teléfonos: 6642455 - 6602124 – Fax: 6645708
E-maill: dirseccgena@cendoj.ramajudicial.gov.co



Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Sala Administrativa
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Cartagena

Hoja No. 4 Resolución No. 760 del 02 Junio de 2015

1997	\$ 1.838.654,00	\$ 1.442.727,00	\$ 395.927,00
1998	\$ 2.282.470,00	\$ 1.677.537,00	\$ 604.933,00
1999	\$ 2.510.718,00	\$ 1.845.292,00	\$ 665.426,00
2000	\$ 2.742.468,00	\$ 2.015.612,00	\$ 726.846,00
2001	\$ 2.815.753,00	\$ 2.070.437,00	\$ 745.316,00
2002	\$ 2.948.694,00	\$ 2.168.163,00	\$ 780.531,00
2003	\$ 3.057.463,00	\$ 2.248.168,00	\$ 809.295,00
2004	\$ 3.182.819,00	\$ 2.340.344,00	\$ 842.475,00
2005	\$ 3.357.874,00	\$ 2.469.063,00	\$ 888.811,00
2006	\$ 3.525.770,00	\$ 2.592.516,00	\$ 933.254,00
2007	\$ 3.684.429,00	\$ 2.709.179,00	\$ 975.250,00
		TOTAL	\$ 9.717.620,00

AÑO	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PAGADA	DIFERENCIA
1997	\$ 1.124.995,00	\$ 865.351,00	\$ 259.604,00
1998	\$ 1.396.498,00	\$ 1.095.357,00	\$ 301.141,00
1999	\$ 1.536.148,00	\$ 1.204.893,00	\$ 331.255,00
2000	\$ 1.677.935,00	\$ 1.316.105,00	\$ 361.830,00
2001	\$ 1.722.780,00	\$ 1.351.902,00	\$ 370.878,00
2002	\$ 1.804.095,00	\$ 1.415.714,00	\$ 388.381,00
2003	\$ 1.870.677,00	\$ 1.467.954,00	\$ 412.713,00
2004	\$ 1.947.364,00	\$ 1.528.140,00	\$ 419.224,00
2005	\$ 2.054.469,00	\$ 1.612.189,00	\$ 442.280,00
2006	\$ 2.157.193,00	\$ 1.692.797,00	\$ 464.396,00
2007	\$ 2.254.267,00	\$ 1.768.974,00	\$ 485.293,00
		TOTAL	\$ 4.236.995,00

Centro, Edificio Cuartel del Fijo, Cra. 5ª N 36 – 127, Piso 2. Cartagena
Teléfonos: 6642455 - 6602124 – Fax: 6645708
E-maill: dirseccgena@cendoj.ramajudicial.gov.co



101

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Sala Administrativa
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Cartagena

Hoja No.5 Resolución No.760 del 02 Junio de 2015

AÑO	CESANTIAS	CESANTIAS PAGADA	DIFERENCIA
1993	\$ 1.812.500,00	\$ 1.394.230,00	\$ 418.270,00
1994	\$ 2.193.125,00	\$ 1.687.018,00	\$ 506.107,00
1995	\$ 2.587.888,00	\$ 1.990.682,00	\$ 597.206,00
1996	\$ 2.976.070,00	\$ 2.289.284,00	\$ 686.786,00
1997	\$ 3.214.158,00	\$ 2.472.430,00	\$ 741.728,00
1998	\$ 3.989.997,00	\$ 3.129.592,00	\$ 860.405,00
1999	\$ 4.388.997,00	\$ 3.442.552,00	\$ 946.445,00
2000	\$ 4.794.102,00	\$ 3.760.300,00	\$ 1.033.802,00
2001	\$ 4.922.229,00	\$ 3.862.582,00	\$ 1.059.647,00
2002	\$ 5.154.559,00	\$ 4.044.896,00	\$ 1.109.663,00
2003	\$ 5.344.763,00	\$ 4.194.154,00	\$ 1.150.609,00
2004	\$ 5.563.899,00	\$ 4.366.116,00	\$ 1.197.783,00
2005	\$ 5.869.913,00	\$ 4.606.252,00	\$ 1.263.661,00
2006	\$ 6.163.410,00	\$ 4.836.564,00	\$ 1.326.846,00
2007	\$ 6.440.764,00	\$ 5.054.210,00	\$ 1.386.554,00
		TOTAL	\$ 14.285.512,00

20

El total de las pretensiones es: \$ 286.990.200,00

Centro, Edificio Cuartel del Fijo, Cra.5ª N 36 – 127, Piso 2. Cartagena
Teléfonos: 6642455 - 6602124 – Fax: 6645708
E-mail: dirseccgena@cendoj.ramajudicial.gov.co



**Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Sala Administrativa
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Cartagena**

Hoja No. 6 Resolución No. 760 del 02 Junio de 2015

La anterior solicitud la fundamenta la peticionaria en la Sentencia del 29 de abril de 2014, del Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente 11001-03-25-000-2007-00087-00, M.P. María Carolina Rodríguez Ruiz (Conjuez)

Que de conformidad con lo señalado en artículo 150, numeral 19 e) y f) de la Constitución Nacional, corresponde al Congreso de la República fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la fuerza pública, así como regular el régimen de prestaciones sociales mínimas de los trabajadores oficiales.

Que en ejercicio de las anteriores facultades, el Congreso de la República expidió la Ley 4ª de mayo 18 de 1992, mediante la cual faculta al Gobierno Nacional para fijar el régimen salarial y prestacional de los servidores públicos.

Que una vez revisada la información, se pudo constatar que esta Dirección Seccional le ha venido cancelando los salarios y prestaciones sociales a la doctora OLGA ITALINA SALVADOR BETANCUR identificada con la cédula de ciudadanía número 33.131.570 de Cartagena, en su condición de Juez de la República desde el 29 de Julio de 1971 hasta el 22 de Noviembre de 1988; y como Magistrada de Tribunal desde el 23 de Julio de 1988 hasta el 27 de Enero de 2008, tal y como lo establecieron los decretos 57 y 110 de 1993, y subsiguientes, y no puede acceder a reconocer y pagar con ocasión de la declaratoria de nulidad de que fueron objeto algunos apartes de los decretos salariales de los años 1993 a 2007, relacionados con la prima especial (art.14 de la ley 4 de 1992) aplicables a los funcionarios de la Rama Judicial, mediante Sentencia de abril 29 de 2014, proferido por el Consejo de Estado Sección Segunda, Conjuez Dra. María Carolina Rodríguez Ruiz, pues tal como lo expone con claridad el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y lo ha sostenido la Corte Constitucional (Sentencia T-420-01), le compete al Gobierno Nacional presentar el proyecto de presupuesto y la ley de apropiaciones en armonía con su política económica y fiscal, no le corresponde a esta Dirección Seccional, ordenar su modificación con miras a que se incluya un rubro destinado al incremento salarial de los servidores públicos, porque de hacerlo, se inmiscuiría en asuntos que competen a otras autoridades, desbordando así la competencia que le ha sido conferida.

Los efectos de esta declaratoria no son otros que los de propiciar el decaimiento parcial de los apartes anulados de las normas reseñadas, del mundo jurídico y el retiro de los citados artículos de los decretos de salarios involucrados en la declaratoria de nulidad y cuyo aparte preveía que:

"... En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, se considerará como Prima, sin carácter salarial el treinta por ciento (30%) del salario básico mensual de los Magistrados Auxiliares de la. Altas Cortes, de los Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, de los Jueces de la República, de los Coordinadores de Juzgado Penal de Circuito Especializado, de los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, los Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar ..."

*Centro, Edificio Cuartel del Fijo, Cra.5ª N 36 – 127, Piso 2. Cartagena
Teléfonos: 6642455 - 6602124 – Fax: 6645708
E-mail: dirseccgena@cendoj.ramajudicial.gov.co*



**Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Sala Administrativa
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Cartagena**

Hoja No. 7 Resolución No. 760 del 02 Junio de 2015

En este proveído sostiene la Alta Corte que se puede tomar el 30% del salario de estos funcionarios pero solamente para efectos de cuantificar la prima especial, para luego adiccionarla al salario básico. En el fallo también el órgano de cierre considera que, el ejecutivo desbordó su poder, por cuanto bajo la apariencia de una prima especial mensual devengada y que es equivalente al 30% del sueldo básico, en realidad despojó de efectos salariales a dicho porcentaje, con lo que disminuyó con ello el monto de las prestaciones sociales, por lo que concluye que la prima especial de servicios no puede ser inferior al 30% del salario mensual.

A efectos prácticos, los alcances del precedente jurisprudencial anterior serían;

a) Que a los servidores judiciales beneficiarios de la prima especial creada por el Art 14 de la ley 4 de 1992, (y que hayan ocupado los cargos con derecho a percibir la misma), se les debe reliquidar, a partir del 1 de enero de 1993, según tiempos de servicios acreditados, su ingreso mensual adicionando para cada vigencia, a la remuneración mensual fijada por el decreto anual de salarios, el 30% adicional de ésta remuneración como prima especial.

b) Que a los servidores judiciales beneficiarios de la prima especial creada por el Art 14 de la ley 4 de 1992, (y que hayan ocupado los cargos con derecho a percibir la misma), se les debe reliquidar, a partir del 1 de enero de 1993 y hasta el 31 de diciembre de 2007, según tiempos de servicios acreditados, sus prestaciones sociales y factores de salario para cada vigencia, calculándolas sobre el 100% del valor que contempla el ejecutivo como remuneración mensual para cada cargo, en el decreto anual de salarios, pues con base en el marco legal anulado, estas prestaciones se pagan sobre el 70% de la remuneración mensual como base del pago, excepción hecha de los pagos a seguridad social.

c) Que la prima especial, es decir, el 30% adicional al salario, se debe devengar como un plus, el cual en virtud de la previsión legal del art 14 de la ley 4 de 1992 no tiene carácter de factor salarial para liquidar prestaciones sociales.

d) Que como consecuencia de lo anterior, deben hacerse los ajustes en los aportes al sistema general de seguridad social, sobre el valor adicional a la remuneración entendida como prima especial para efectos de hacer los aportes a las pensiones de jubilación a la luz de las previsiones legales consignadas en la ley 332 de 1996.

Así las cosas y como quiera que dicha declaratoria de nulidad quedó en firme el 22 de julio de 2014, surgió la duda para la entidad, lo que conllevó a que se elevara consulta por parte de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial con respecto a los efectos vinculantes que para la administración pueda tener este fallo que declara la nulidad de algunos artículos de algunos de los decretos de salarios de pasadas vigencias (de los años 1993 a 2007).

Centro, Edificio Cuartel del Fijo, Cra. 5ª N 36 - 127, Piso 2. Cartagena
Teléfonos: 6642455 - 6602124 - Fax: 6645708
E-mail: dirseccgena@cendoj.ramajudicial.gov.co



**Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Sala Administrativa
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Cartagena**

Hoja No.8 Resolución No.760 del 02 Junio de 2015

Una vez realizados los cálculos, se elevan las consultas a los diferentes órganos del Estado competentes para ello, (Departamento Administrativo de la Función Pública, Ministerio de Justicia, Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado) pidiéndoles la instrucción a seguir y de otra parte se eleva el requerimiento de la adición presupuestal del caso específicamente al Ministerio de Hacienda ante la inquietud surgida sobre los efectos de la declaratoria de nulidad, de esta actuación da cuenta el oficio DEAJ14-927 del 27 de agosto de 2014, reiterado con oficio DEAJ14-1191 del 4 de noviembre de 2014, de manera tal que de su trámite, autorización y situado oportuno de recursos pudiera la administración judicial atender, "administrativamente" las obligaciones salariales que estimaba se derivaban a partir de la ejecutoria de la sentencia de nulidad.

Por ser igualmente importante, se solicitó instrucción a seguir, al órgano competente para fijar las políticas en materia de régimen salarial y prestacional en el sector público, "Departamento Administrativo de la Función Pública", sobre los efectos de dicha declaratoria a nivel liquidación de nómina y específicamente frente al decreto de salarios vigente para la Rama Judicial, que corresponde al No. 194 de 2014, vigente a la fecha, dado que éste contiene la misma redacción y procedimiento para liquidar la prima especial que de hecho ha aplicado la entidad y que hoy objetan los diferentes peticionarios, así como con relación a los decretos expedidos por el ejecutivo del año 2008 al 2014, los cuales gozan de la presunción de legalidad pues no han sido anulados por el ente competente.

Al respecto el Departamento Administrativo de la Función Pública ha informado que se encuentra estudiando los alcances del fallo, situación sobre la cual a la fecha no se ha comunicado aspecto alguno.

A la fecha, no se ha modificado el decreto de salario vigente, para los servidores de la Rama Judicial sometido al régimen salarial y prestacional especial (Dto 57 de 1993), el cual contiene esta previsión legal, articulado que como autoridad administrativa debemos acatar, razón ésta que impide modificar el régimen salarial consagrado en el decreto de salarios, reliquidando el 30% como un valor adicional sobre el salario básico mensual que estipula este decreto aunado al carácter de factor salarial al 100% de lo devengado por el trabajador como remuneración mensual, concepto este último que es el que fija el Gobierno en los Decretos.

Mediante oficio de fecha 30 de diciembre de 2014, radicado en el Centro de Gestión Documental de la Dirección Ejecutiva con registro EXDE1S-50 el 05 de enero de 2015, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a través del Director General de Presupuesto

Público Nacional, Dr. FERNANDO JIMÉNEZ RODRÍGUEZ, se pronunció sobre el requerimiento formulado por la entidad con el oficio DEAJ14-927 de 27 de agosto de 2014, respecto del impacto y efectos derivados de la sentencia proferida por el Consejo

**Centro, Edificio Cuartel del Fijo, Cra.5ª N 36 – 127, Piso 2. Cartagena
Teléfonos: 6642455 - 6602124 – Fax: 6645708
E-maill: dirseccgena@cendoj.ramajudicial.gov.co**



Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Sala Administrativa
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Cartagena

Hoja No.9 Resolución No.760 del 02 Junio de 2015

de Estado el 29 de abril de 2014, proveído con el cual el máximo órgano de cierre en lo Contencioso Administrativo declaró la nulidad de los artículos que en los decretos de salarios de los años 1993 a 2007 establecieron como Prima sin carácter salarial el 30% de la asignación básica de los cargos en ellos enlistados, concluyendo en lo pertinente:

"...En ese contexto se reitera que toda erogación incluido el gasto que usted sugiere, debe contar con un título constitutivo de gasto. Pero en estos casos no nos encontramos frente a una sentencia de nulidad y restablecimiento del derecho, que desde luego constituiría un título legítimo de gasto, porque es un crédito Judicialmente reconocido, sino que la situación judicial que estamos analizando trata de una sentencia de simple nulidad.

Respecto a las sentencias de simple nulidad, en principio podemos decir que no son título constitutivo de gasto, por la sencilla razón que en nuestro ordenamiento jurídico no existe la nulidad de pleno derecho de los actos administrativos particulares, que se expidan con fundamento en uno general que haya sido anulado...

"...Entonces, la verdadera pregunta consiste en determinar lo siguiente: ¿cuál es el efecto de una Sentencia de nulidad? La respuesta se encuentra en la misma jurisprudencia:

"Para responder este interrogante cabe destacar que el fin, móvil o motivo de las acciones de nulidad de actos administrativos es el del mantenimiento de la legalidad abstracta, y no el del restablecimiento de derechos de carácter subjetivo. Por lo tanto, las sentencias proferidas en esos juicios, que simplemente declaran la nulidad de actos administrativos no tienen efectos creadores de derechos individuales."

De lo expuesto en precedencia es claro para la administración judicial, que para el Ejecutivo representado en materia de gasto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la sentencia proferida por el Consejo de Estado del 29 de abril de 2014, por la cual se decretó la nulidad de algunos artículos de los decretos de salarios de los años 1993 a 2007, no es un título constitutivo de gasto, razón por la cual no puede aplicarse administrativamente a los posibles reclamantes ante cada Dirección Seccional, la sentencia de nulidad que en la actualidad están invocando.

Así las cosas, como a la fecha de la presente providencia, la posición de la citada Cartera no ha variado con relación al efecto vinculante de la declaratoria de nulidad de algunos artículos de los decretos de salarios de los años 1993 a 2007 aunado a la no disponibilidad de recursos es claro en consecuencia que NO ES VIABLE acceder a este tipo de pretensiones que se tiene conocimiento han elevado diferentes servidores judiciales, sin que se vean gravemente involucradas las responsabilidades que como agentes del Estado estamos obligados a custodiar.

En tal virtud, no puede la administración judicial, autorizar sin orden judicial que así lo imponga y por ende sin el respectivo respaldo presupuestal, el reconocimiento y pago de las diferencias reclamadas de manera retroactiva, desde el 1 de enero de 1993 en adelante, como pretenden en la actualidad diferentes peticionarios, hacerlo sería actuar

8
Centro, Edificio Cuartel del Fijo, Cra.5ª N 36 – 127, Piso 2. Cartagena
Teléfonos: 6642455 - 6602124 – Fax: 6645708
E-maill: dirseccgena@cendoj.ramajudicial.gov.co

30
100



**Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Sala Administrativa
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Cartagena**

Hoja No. 10 Resolución No. 760 del 02 Junio de 2015

por fuera del ámbito de nuestra competencia y generaría diferentes responsabilidades para la entidad y sus diferentes agentes.

En estos términos, se espera dejar clara la gestión impulsada por el nivel central ante los diferentes órganos competentes para ello, una vez se ejecutorió la sentencia en estudio, así como las resultas de la misma, consecuencia de la cual se tiene que administrativamente no es viable acceder a las reclamaciones de nivelación salarial que se radiquen por los diferentes servidores judiciales, (activos y ya retirados) en los diferentes distritos judiciales.

De conformidad con las reglas de la legalidad del gasto que es un desarrollo del principio de legalidad de la función pública, esta Dirección Seccional no podría crear la obligación a cargo del Estado de reajustar el salario de los servidores públicos en un monto determinado y para una vigencia específica, como tampoco ordenar que el Gobierno Nacional lo haga, porque estaría quebrantando los artículos 345, 346 y 347 de la Constitución Política, como también el artículo 71 del Estatuto Orgánico del Presupuesto (Decreto 111 de 1996). Lo anterior, por cuanto de conformidad con estas disposiciones no se puede crear una obligación, ni tampoco ordenar un gasto, sin que se cuente para el efecto con la respectiva disponibilidad presupuestal. Así mismo, no debe olvidarse que el artículo 136 del Código Penal tipifica como peculado comprometer sumas superiores a las fijadas en el presupuesto, al igual que invertir las incluidas en éste en forma diferente a la prevista.

Que de conformidad con los regímenes salariales y prestacionales que existen en la Rama Judicial, es importante precisar que en el caso concreto de OLGA ITALINA SALVADOR BETANCUR, pertenece al régimen de acogidos y se le cancelaron los salarios que establecían los decretos salariales proferidos por el Gobierno Nacional, mediante los cuales se establecían los salarios para los empleados de la Rama Judicial, y de los cuales el 30% del salario básico mensual de los Jueces de la República corresponde a prima especial de servicios sin carácter salarial.

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO- Negar la solicitud o petición de reconocimiento y pago de diferencias salariales y prestaciones sociales, elevada por OLGA ITALINA SALVADOR BETANCUR, identificada con la cédula de ciudadanía número 33.131.570 de Cartagena, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Reconocer personería al doctor ALBERTO VELEZ BAENA, identificado con C.C. No. 9.074.593 de Cartagena y Tarjeta Profesional de Abogado No.

[Handwritten mark]
**Centro, Edificio Cuartel del Fijo, Cra. 5ª N 36 – 127, Piso 2. Cartagena
Teléfonos: 6642455 - 6602124 – Fax: 6645708
E-mail: dirseccgena@cendoj.ramajudicial.gov.co**

[Handwritten signature]



Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Sala Administrativa
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Cartagena

104

Hoja No.11 Resolución No.760 del 02. Junio de 2015

52.656 del Consejo Superior de la Judicatura, en los términos y para los fines del poder conferido.

ARTICULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y contra ella proceden los recursos de reposición y apelación, los cuales deberán interponerse dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación del presente acto y ante la misma autoridad que lo emite, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011, con el lleno de los requisitos establecidos en el artículo 77 de la misma Ley.

31

Dada en Cartagena de Indias el dos (02) de Junio de 2015


NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

HERNANDO DARIO SIERRA PORTO
Director Seccional

TCS.



Centro, Edificio Cuartel del Fijo, Cra.5ª N 36 – 127, Piso 2. Cartagena
Teléfonos: 6642455 - 6602124 – Fax: 6645708
E-maill: dirseccgena@cendoj.ramajudicial.gov.co



**Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Sala Administrativa
Dirección Seccional de Administración Judicial
Cartagena – Bolívar**

**EL COORDINADOR DE ASUNTOS LABORALES DEL AREA DE TALENTO
HUMANO DE LA RAMA JUDICIAL DE CARTAGENA A PETICION DE LA PARTE
INTERESADA Y PREVIO EXAMEN DE LOS ARCHIVOS QUE REPOSAN EN ESTA
SECCION**

CERTIFICA

Que la señora **OLGA ITALINA SALVADOR BETANCOURT**, identificada con la cédula de ciudadanía Nro. 33.131.570 expedida en Cartagena, Laboró en calidad de Magistrado Tribunal en el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO BOLIVAR de Bolívar, vinculada desde el 29 de julio de 1971 hasta el 27 de enero de 2008, Certificamos salarios y factores salariales a a partir del año 2001 a la fecha de retiro:

FECHA	CARGO / DESPACHO	SALARJO BASICO	PRIMA ESPECIAL	BONIFICACION COMPENSACION	TOTAL	AÑO
01/01/2001 30/12/2001	Magistrado Tribunal y Consejo DESPACHO 4 S. 1 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO BOLIVAR	\$3,687,771.00	\$1,106,332.00	\$2,602,132.00	\$7,396,235.00	2001
01/01/2002 30/12/2002	Magistrado Tribunal y Consejo Dec. 4040 grado 01 DESPACHO 4 S. 1 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO BOLIVAR	\$3,959,170.00	\$1,187,751.00	\$2,814,340.00	\$7,961,261.00	2002
01/01/2003 30/12/2003	Magistrado Tribunal y Consejo DESPACHO 4 S. 1 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO BOLIVAR	\$3,959,170.00	\$1,187,751.00	\$2,814,340.00	\$7,961,261.00	2003
	Magistrado Tribunal y Consejo Dec. 4040 grado 01	\$4,263,282.00	\$1,229,441.00	\$6,052,088.00		2004

Centro, Calle del Cuartel – Edificio Cuartel del Fijo, Carrera 5°. No. 36 - 127
Teléfonos (5) – 6647808 - 6602124 Fax (5) – 6645708
E-mail: unirhcar@cendoj.ramajudicial.gov.co



105

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Sala Administrativa
Dirección Seccional de Administración Judicial
Cartagena – Bolívar

01/01/2004 30/12/2004	DESPACHO 4 S. 1 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO BOLIVAR				\$11,544,811.00	
01/01/2005 30/12/2005	Magistrado Tribunal y Consejo Dec. 4040 grado 01 DESPACHO 4 S. 1 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO BOLIVAR	\$4,497,774.00	\$1,349,332.00	\$6,369,311.00	\$ 12,216,417.00	2005
01/01/2006 30/12/2006	Magistrado Tribunal y Consejo Dec. 4040 grado 01 DESPACHO 4 S. 1 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO BOLIVAR	\$4,722,663.00	\$1,416,799.00	\$6,740,416.00	\$ 12,879,878.00	2006
01/01/2007 30/12/2007	Magistrado Tribunal y Consejo Dec. 4040 grado 01 DESPACHO 4 S. 1 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO BOLIVAR	\$4,935,183.00	\$1,480,555.00	\$7,113,087.00	\$ 13,528,825.00	2007
01/01/2008 27/01/2008	Magistrado Tribunal y Consejo Dec. 4040 grado 01 DESPACHO 4 S. 1 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO BOLIVAR	\$5,215,995.00	\$1,564,799.00	\$7,517,821.00	\$14,298,615.00	2008

Continuación del certificado de OLGA ITALINA SALVADOR BETANCOURT

CONCEPTO	VALOR	AÑO
Bonificación por Servicios Pre	\$ 1,323,505.00	2001
Prima de Vacaciones	\$ 2,026,945.00	2001
Prima de Servicios	\$ 1,945,867.00	2001
Prima de Navidad	\$ 4,222,802.00	2001
Bonificación por Servicios Pre	\$ 1,385,710.00	2002
Prima de Vacaciones	\$ 2,122,211.00	2002
Prima de Servicios	\$ 2,037,323.00	2002
Prima de Navidad	\$ 4,421,274.00	2002
Bonificación por Servicios Pre	\$ 1,434,348.00	2003

Centro, Calle del Cuartel – Edificio Cuartel del Fijo, Carrera 5° No. 36 - 127

Teléfonos (5) – 6647808 - 6602124 Fax (5) – 6645708

E-mail: unirhcar@cendoj.ramajudicial.gov.co



Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Sala Administrativa
Dirección Seccional de Administración Judicial
Cartagena – Bolívar

<i>Prima de Vacaciones</i>	\$ 2,196,701.00	2003
<i>Prima de Servicios</i>	\$ 2,108,833.00	2003
<i>Prima de Navidad</i>	\$ 4,576,460.00	2003
<i>Bonificación por Servicios Pre</i>	\$ 1,492,152.00	2004
<i>Prima de Vacaciones</i>	\$ 2,285,228.00	2004
<i>Prima de Servicios</i>	\$ 2,193,819.00	2004
<i>Prima de Navidad</i>	\$ 4,760,892.00	2004
<i>Bonificación por Servicios Pre</i>	\$ 1,574,224.00	2005
<i>Prima de Vacaciones</i>	\$ 2,410,916.00	2005
<i>Prima de Servicios</i>	\$ 2,314,480.00	2005
<i>Prima de Navidad</i>	\$ 4,185,618.00	2005
<i>Bonificación por Servicios Pre</i>	\$ 1,652,932.00	2006
<i>Prima de Vacaciones</i>	\$ 2,514,585.00	2006
<i>Prima de Servicios</i>	\$ 2,025,170.00	2006
<i>Prima de Navidad</i>	\$ 5,238,720.00	2006
<i>Bonificación por Servicios Pre</i>	\$ 1,727,314.00	2007
<i>Prima de Vacaciones</i>	\$ 2,645,378.00	2007
<i>Prima de Servicios</i>	\$ 2,539,563.00	2007
<i>Prima de Navidad</i>	\$ 5,511,204.00	2007
<i>Bonificación por Servicios Pre</i>	\$ 1,825,598.00	2008
<i>Prima de Servicios</i>	\$ 1,269,781.00	2008

Para certificar se expide y firma en Cartagena de Indias a los 1 de junio de 2015


LARRY LOPEZ OSPINO

Elaboró: Tatiana Varela

Centro, Calle del Cuartel – Edificio Cuartel del Fijo, Carrera 5°. No. 36 - 127
Teléfonos (5) – 6647808 - 6602124 Fax (5) – 6645708

E-mail: unirhcar@cendoj.ramajudicial.gov.co

Página 3 de 3



*Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Sala Administrativa
Dirección Seccional de la Rama Judicial
Cartagena – Bolívar*

106

EL SUSCRITO COORDINADOR DE ASUNTOS LABORALES DEL AREA DE TALENTO HUMANO DE LA RAMA JUDICIAL DE CARTAGENA A PETICION DE LA PARTE INTERESADA Y PREVIO EXAMEN DE LOS ARCHIVOS QUE REPOSAN EN ESTA SECCION

CERTIFICA

Que la señora OLGA ITALINA SALVADOR BETANCOURT, identificada con la cédula de ciudadanía Nro. 33131570 expedida en CARTAGENA, laboró en la rama judicial en calidad de Magistrado Tribunal y Consejo del despacho DESPACHO 4 S. 1 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO BOLIVAR, vinculada desde Julio 29 de 1971 hasta enero 27 2008.

33

A continuación se relacionan los cargos desempeñados en la Rama Judicial de Bolívar:

FECHA	CARGO / DESPACHO
29/07/1971 - 30/08/1973	JUEZ MUNICIPAL GRADO 00 JUZGADO 4 CIVIL MUNICIPAL CARTAGENA
31/08/1973 - 22/07/1988	JUEZ DE CIRCUITO GRADO 00 JUZGADO 1 CIVIL DEL CIRCUITO CARTAGENA
23/07/1988 - 27/01/2008	MAGISTRADO TRIBUNAL Y CONSEJO DEC. 4040 GRADO 01 DESPACHO 4 S. 1 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO BOLIVAR

La presente constancia se expide a solicitud de la parte interesada en la ciudad de Cartagena de Indias el día junio 02 de 2015.

LARRY LOPEZ OSPINO

Elaboro. Tatiana

*Centro, Calle del Cuartel – Edificio Cuartel del Fijo, Carrera 5º. No. 36 - 127
Teléfonos (5) – 6647808 - 6602124 Fax (5) – 6645708
E-mail: unirhcar@cendoj.ramajudicial.gov.co*



**Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Sala Administrativa
Dirección Seccional de la Rama Judicial
Cartagena – Bolívar**

EL SUSCRITO COORDINADOR DE ASUNTOS LABORALES DEL AREA DE TALENTO HUMANO DE LA RAMA JUDICIAL DE CARTAGENA A PETICION DE LA PARTE INTERESADA Y PREVIO EXAMEN DE LOS ARCHIVOS QUE REPOSAN EN ESTA SECCION

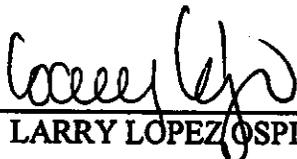
CERTIFICA

Que la señora OLGA ITALINA SALVADOR BETANCOURT, identificada con la cédula de ciudadanía Nro. 33131570 expedida en CARTAGENA, laboró en la rama judicial en calidad de Magistrado Tribunal y Consejo del despacho DESPACHO 4 S. 1 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO BOLIVAR, vinculada desde Julio 29 de 1971 hasta enero 27 2008.

A continuación se relacionan los cargos desempeñados en la Rama Judicial de Bolívar:

FECHA	CARGO / DESPACHO
29/07/1971 - 30/08/1973	JUEZ MUNICIPAL GRADO 00 JUZGADO 4 CIVIL MUNICIPAL CARTAGENA
31/08/1973 - 22/07/1988	JUEZ DE CIRCUITO GRADO 00 JUZGADO 1 CIVIL DEL CIRCUITO CARTAGENA
23/07/1988 - 27/01/2008	MAGISTRADO TRIBUNAL Y CONSEJO DEC. 4040 GRADO 01 DESPACHO 4 S. 1 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO BOLIVAR

La presente constancia se expide a solicitud de la parte interesada en la ciudad de Cartagena de Indias el día junio 02 de 2015.


LARRY LOPEZ OSPINO

Elaboro. Tatiana

Cartagena, Febrero 19 de 2015

SEÑORES

NACION NACIÓN – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL.
BOGOTÁ D.C.

19 FEB 2015
5) Feb 2
107
H:3:36m

REFERENCIA: ADICION DE PETICION DE REAJUSTE DE SALARIO Y LIQUIDACION DE PRESTACIONES CAUSADAS INCLUYENDO LA PRIMA ESPECIAL (30%) COMO FACTOR SALARIAL.

34

ALBERTO VELEZ BAENA, mayor de edad, residente en la ciudad de Cartagena, abogado en ejercicio, identificado como aparece al pie de mi respectiva firma, obrando en condición de apoderado especial de la solicitante OLGA ITALINA SALVADOR BETANCOURT, mayor, identificado con la cédula de ciudadanía No.33.131.570, con este memorial quiero adicionar al documento radicado en ese ente el día 19 de Enero de 2.015, el cual se hizo con el fin de agotar la vía gubernativa del proceso administrativo de reajuste, pago salarial y prestaciones sociales incluyendo la prima especial como factor salarial ELEVADO a derecho de petición de reclamación salarial conforme el art. 23 C.N. Esta adicción debe anexarse al documento remitido inicialmente para su trámite administrativo conjunto.

En el acápite donde se establece las pretensiones de mi poderdante no son hasta el 30 de Septiembre de 2006, si no hasta el 26 de enero de 2008, que fue el año de su retiro, quedara en la siguiente forma.

PRETENSIONES:

Pretendo le sean reconocidas a mi poderdante las siguientes sumas y conceptos, por la diferencia entre lo que le fue cancelado bajo los decreto expedidos por el Gobierno Nacional declarados nulos y los subsiguientes por virtud del art. 148 del CPACA, y lo que le realmente le debieron liquidar bajo la Ley 4° de 1992:

AÑO	SALARIO MENSUAL DEVENGADO	PRIMA ESPECIAL DE SERVICIO (MENSUAL)	PRIMA ESPECIAL DE SERVICIO (ANUAL)
1993	\$ 1.812.500,00	\$ 543.750,00	\$ 6.525.000,00
1994	\$ 2.193.125,00	\$ 657.937,00	\$ 7.895.250,00
1995	\$ 2.587.888,00	\$ 776.366,00	\$ 9.316.396,00

1999	\$ 4.388.997,00	\$ 1.316.699,00	\$ 15.800.389,00
2000	\$ 4.794.102,00	\$ 1.438.230,00	\$ 17.258.767,00
2001	\$ 4.922.229,00	\$ 1.476.668,00	\$ 17.720.024,00
2002	\$ 5.154.559,00	\$ 1.546.367,00	\$ 18.556.412,00
2003	\$ 5.344.763,00	\$ 1.603.428,00	\$ 19.241.146,00
2004	\$ 5.563.899,00	\$ 1.669.169,00	\$ 20.030.036,00
2005	\$ 5.869.913,00	\$ 1.760.973,00	\$ 21.131.686,00
2006	\$ 6.163.410,00	\$ 1.849.023,00	\$ 22.188.276,00
2007	\$ 6.440.764,00	\$ 1.932.229,00	\$ 23.186.750,00
TOTAL			\$235.498.941,00

AÑO	PRIMA DE NAVIDAD	PRIMA DE NAVIDAD PAGADA	DIFERENCIA
1993	\$ 1.969.834,00	\$ 1.438.746,00	\$ 531.088,00
1994	\$ 2.383.500,00	\$ 1.817.824,00	\$ 565.676,00
1995	\$ 2.812.531,00	\$ 2.146.848,00	\$ 665.683,00
1996	\$ 3.234.408,00	\$ 2.471.074,00	\$ 763.334,00
1997	\$ 3.598.954,00	\$ 2.984.816,00	\$ 614.138,00
1998	\$ 4.467.674,00	\$ 3.475.301,00	\$ 992.373,00
1999	\$ 4.914.443,00	\$ 3.830.378,00	\$ 1.084.065,00
2000	\$ 5.368.047,00	\$ 4.199.191,00	\$ 1.168.856,00
2001	\$ 5.511.514,00	\$ 4.309.201,00	\$ 1.202.313,00
2002	\$ 5.771.661,00	\$ 4.508.492,00	\$ 1.263.169,00
2003	\$ 5.984.633,00	\$ 4.683.682,00	\$ 1.300.951,00
2004	\$ 6.230.003,00	\$ 4.868.775,00	\$ 1.361.228,00
2005	\$ 6.572.653,00	\$ 5.125.474,00	\$ 1.447.179,00

3
108

TOTAL	\$ 16.047.999,00
-------	------------------

AÑO	PRIMA DE SERVICIOS	PRIMA DE SERVICIO PAGADA	DIFERENCIA
1993	\$ 906.250,00	\$ 697.115,00	\$ 209.135,00
1994	\$ 1.096.562,00	\$ 843.509,00	\$ 253.053,00
1995	\$ 1.293.944,00	\$ 995.341,00	\$ 298.603,00
1996	\$ 1.488.035,00	\$ 1.144.643,00	\$ 343.392,00
1997	\$ 1.653.952,00	\$ 1.385.018,00	\$ 268.934,00
1998	\$ 2.053.185,00	\$ 1.610.435,00	\$ 442.750,00
1999	\$ 2.258.504,00	\$ 1.771.479,00	\$ 487.025,00
2000	\$ 2.466.964,00	\$ 1.934.988,00	\$ 531.976,00
2001	\$ 2.532.897,00	\$ 1.987.618,00	\$ 542.279,00
2002	\$ 2.652.450,00	\$ 2.081.436,00	\$ 571.014,00
2003	\$ 2.750.326,00	\$ 2.158.241,00	\$ 592.085,00
2004	\$ 2.863.089,00	\$ 2.246.730,00	\$ 616.359,00
2005	\$ 3.020.559,00	\$ 2.370.301,00	\$ 650.258,00
2006	\$ 3.171.588,00	\$ 2.488.815,00	\$ 682.773,00
2007	\$ 3.314.309,00	\$ 2.600.812,00	\$ 713.497,00
		TOTAL	\$ 7.203.133,00

35

AÑO	PRIMA DE VACACIONES	PRIMA DE VACACIONES PAGADA	DIFERENCIA
1993	\$ 981.770,00	\$ 726.161,00	\$ 255.609,00
1994	\$ 1.107.040,00	\$ 870.655,00	\$ 236.385,00

1997	\$ 1.838.654,00	\$ 1.442.727,00	\$ 395.927,00
1998	\$ 2.282.470,00	\$ 1.677.537,00	\$ 604.933,00
1999	\$ 2.510.718,00	\$ 1.845.292,00	\$ 665.426,00
2000	\$ 2.742.458,00	\$ 2.015.612,00	\$ 726.846,00
2001	\$ 2.815.753,00	\$ 2.070.437,00	\$ 745.316,00
2002	\$ 2.948.694,00	\$ 2.168.163,00	\$ 780.531,00
2003	\$ 3.057.463,00	\$ 2.248.168,00	\$ 809.295,00
2004	\$ 3.182.819,00	\$ 2.340.344,00	\$ 842.475,00
2005	\$ 3.357.874,00	\$ 2.469.063,00	\$ 888.811,00
2006	\$ 3.525.770,00	\$ 2.592.516,00	\$ 933.254,00
2007	\$ 3.684.429,00	\$ 2.709.179,00	\$ 975.250,00
		TOTAL	\$ 9.717.620,00

AÑO	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PAGADA	DIFERENCIA
1997	\$ 1.124.995,00	\$ 865.351,00	\$ 259.604,00
1998	\$ 1.396.498,00	\$ 1.095.357,00	\$ 301.141,00
1999	\$ 1.536.148,00	\$ 1.204.893,00	\$ 331.255,00
2000	\$ 1.677.935,00	\$ 1.316.105,00	\$ 361.830,00
2001	\$ 1.722.780,00	\$ 1.351.902,00	\$ 370.878,00
2002	\$ 1.804.095,00	\$ 1.415.714,00	\$ 388.381,00
2003	\$ 1.870.677,00	\$ 1.467.954,00	\$ 412.713,00
2004	\$ 1.947.364,00	\$ 1.528.140,00	\$ 419.224,00
2005	\$ 2.054.469,00	\$ 1.612.189,00	\$ 442.280,00
2006	\$ 2.157.193,00	\$ 1.692.797,00	\$ 464.396,00
2007	\$ 2.254.267,00	\$ 1.768.974,00	\$ 485.293,00

3
109

AÑO	CESANTIAS	CESANTIAS PAGADA	DIFERENCIA
1993	\$ 1.812.500,00	\$ 1.394.230,00	\$ 418.270,00
1994	\$ 2.193.125,00	\$ 1.687.018,00	\$ 506.107,00
1995	\$ 2.587.888,00	\$ 1.990.682,00	\$ 597.206,00
1996	\$ 2.976.070,00	\$ 2.289.284,00	\$ 686.786,00
1997	\$ 3.214.158,00	\$ 2.472.430,00	\$ 741.728,00
1998	\$ 3.989.997,00	\$ 3.129.592,00	\$ 860.405,00
1999	\$ 4.388.997,00	\$ 3.442.552,00	\$ 946.445,00
2000	\$ 4.794.102,00	\$ 3.760.300,00	\$ 1.033.802,00
2001	\$ 4.922.229,00	\$ 3.862.582,00	\$ 1.059.647,00
2002	\$ 5.154.559,00	\$ 4.044.896,00	\$ 1.109.663,00
2003	\$ 5.344.763,00	\$ 4.194.154,00	\$ 1.150.609,00
2004	\$ 5.563.899,00	\$ 4.366.116,00	\$ 1.197.783,00
2005	\$ 5.869.913,00	\$ 4.606.252,00	\$ 1.263.661,00
2006	\$ 6.163.410,00	\$ 4.836.564,00	\$ 1.326.846,00
2007	\$ 6.440.764,00	\$ 5.054.210,00	\$ 1.386.554,00
		TOTAL	\$ 14.285.512,00

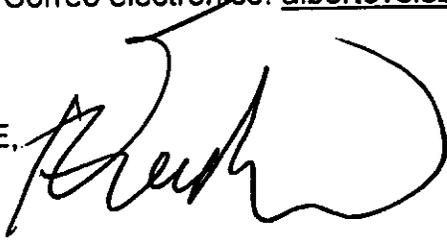
36

El total de las pretensiones es: \$ 286.990.200,00

NOTIFICACIÓN: Centro la Matuna Edificio Banco Popular Oficina 10-04, de Cartagena D. T. y C. Correo electrónico: albertovelezbaena50@yahoo.com

MUY ATENTAMENTE,

Alberto Vélez Baena



C.C. N. 9074593 de Cartagena

T.P.No.52656 C.S.J.

1
5
1

19 ENE. 2015

H: 8:00 P

J. J. J.

DOCUMENTACIÓN

JUDICIAL

DERECHO DE PETICIÓN CONSTITUCIONAL DE INFORMACIÓN.

Cartagena, Noviembre 22 de 2.014.

SEÑORES

NACIÓN – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL.
BOGOTÁ D.C.

REFERENCIA: DERECHO DE PETICIÓN DE REAJUSTE DE SALARIO Y LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES CAUSADAS INCLUYENDO LA PRIMA ESPECIAL (30%) COMO FACTOR SALARIAL.

ALBERTO VELEZ BAENA, mayor de edad, residente en la ciudad de Cartagena, abogado en ejercicio, identificado como aparece al pie de mi respectiva firma, obrando en condición de apoderado especial de la solicitante **OLGA ITALINA SALVADOR BETANCOURT**, mayor, identificado con la cédula de ciudadanía No.33.131.570, según poder anexo, con este memorial y a fin de agotar la vía gubernativa del proceso administrativo de reajuste, pago salarial y prestaciones sociales incluyendo la prima especial como factor salarial ELEVADO a derecho de petición de reclamación salarial conforme el art. 23 C.N., solicito en su nombre en su condición de EX MAGISTRADA GRADO 21 DEL HONORABLE TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO JUDICIAL DE CARTAGENA, por lapso comprendido entre el 01 de Julio de 1986 hasta el 30 de Septiembre 2006, el reconocimiento y pago del reajuste salarial y prestacional, previsto por la Ley 4° de 1992, (cesantías, vacaciones, prima de navidad, prima de servicio, prima de vacaciones, bonificación por servicio y demás prestaciones), contabilizando como factor salarial la prima especial PAGADERA MENSUALMENTE equivalente al 30% de sus ingresos laborales para la Rama Judicial del Poder Público, todo lo anterior conforme las CONSIDERACIONES que se dejarán anotadas seguidamente :

1. El Congreso de la Republica expidió la Ley 4° de 1992 en desarrollo del Art 150, num 19, lit e) y f) de la Constitución, para señalar las normas, objetivos y criterios generales que debía observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, los miembros del Congreso Nacional y de la fuerza Pública, y las prestaciones sociales de los trabajadores oficiales. En consecuencia se creó, una PRIMA ESPECIAL DE SERVICIO que oscilaría entre el 30 y el 60% del salario básico mensual, la cual modificaría el sistema salarial correspondiente a los empleados y aumentaría sus remuneraciones, con sujeción a la política macroeconómica y fiscal, observando las limitaciones presupuestales y respetando los derechos adquiridos de los servidores públicos.

fijación del régimen salarial y prestacional contemplado en la Ley 4° de 1992 se limita a la determinación de valores numéricos porcentuales o absolutos para cada una de las categorías de conceptos salariales y prestacionales.

3. El Gobierno, so pretexto de cumplir con lo ordenado en el Art. 14 de la Ley 4° de 1992, creo la prima especial sin carácter salarial y la incluyo dentro del monto fijado en el respectivo decreto para el salario básico, restándolo el 30% para el cálculo de las prestaciones sociales, indemnizaciones y demás derechos laborales que consagra la ley para tales servidores públicos, es decir descompuso el salario básico en dos factores, uno equivalente al 70% y se siguió denominando salario básico y el 30% restante lo denominó prima especial de servicios. -
 4. Sin embargo el Gobierno interpretó de forma errónea la norma pues al restar el 30% del salario de los empleados de que trata la Ley 4° de 1995, se modifica la remuneración en su integridad con menoscabo de los derechos de los trabajadores, alejándose de la definición de salario que trae el Código Sustantivo del Trabajo, que le asigna la atribución de influir en las prestaciones sociales, pues calculan a partir del salario básico.
 5. La prima creada por la Ley 4° de 1992 tiene la siguientes características:
 - a) Es un componente de la remuneración o ingreso de los funcionarios que es renta de trabajo aunque no tiene el carácter de salario, es decir que no puede ser tenida en cuenta para el cálculo de las prestaciones sociales de los trabajadores, dado que así lo determino la mencionada Ley 4°.
 - b) Es un aumento que debe decretarse entre el 30% y el 60% del salario básico, no una disminución del mismo, como erróneamente los decretos expedidos por el Gobierno Nacional lo hicieron. En los cuales dicen que la prima que establece en el 30% hace parte del salario básico, es decir, incluyeron tal prima dentro de la cuantía del salario básico, disminuyéndolo al 70%, con menoscabo de los derechos de los trabajadores. En consecuencia se violaron la ley 4° de 1992 y el Código Sustantivo del Trabajo.
 - c) La prima como derecho laboral no es una sanción ni un gravamen al salario, sino obviamente un aumento, pues la ley lo ordenó como tal, de conformidad con las normas constitucionales que no admiten enmiendas legislativas por medio de actos administrativos ni desmejorar derechos adquiridos de los trabajadores. La prima es entonces un beneficio, una especie de sobresueldo o de aumento que han de recibir los funcionarios listados en la Ley 4°, tal y como lo entendió el Consejo de Estado en sentencia 15 de abril de 2004.
- Es así como el Gobierno Nacional al expedir los decretos

37

como prima especial y que la misma no tiene carácter salarial.

- d) Con la expedición de los decretos de fijación de salarios que anualmente expidió el Gobierno Nacional en los términos anteriores, es decir descomponiendo el salario básico en dos factores: 70% salario básico y 30% prima especial, antes que un aumento en las asignaciones mensuales, lo que realmente se materializó fue una disminución del salario básico en 30% y por esa vía se afectaron las primas de servicios, navidad y vacaciones, cesantías, bonificaciones de servicios anuales, puesto que todas estas se liquidan sobre el salario básico.
6. Todo lo anterior fue dirimido mediante acción de simple nulidad instaurado por el ciudadano PABLO J. CACERES CORRALES en contra de LA NACION-MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA, MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, en cuyo proceso se estudió si el Gobierno Nacional, al expedir los Decretos demandados, dio cumplimiento a lo ordenado en el artículo 14 de la Ley 4° de 1992 respecto de la prima especial, o por el contrario, generó una disminución en la asignación básica mensual de los funcionarios de que trata la mencionada norma, al consagrar que el 30% de la remuneración mensual se considera como prima especial y que la misma no tiene carácter salarial.
7. Al dirimir la controversia mediante sentencia de mérito el **Consejo de Estado, Sección Segunda, en sentencia de abril 29 de 2014, Exp. 11001-03-25-000-2007-00087-00, M.P. Dra María Carolina Rodríguez Ruiz (Conjuez)**, manifestó: *".....De acuerdo con los criterios establecidos en la ley marco, esto es la Ley 4° de 1992, es claro que el Gobierno Nacional contravino los criterios fijados por el legislador con la expedición de los decretos demandados, pues como se pudo observar, el literal a) del artículo 2° de la mencionada Ley estableció que de ninguna manera se podían desmejorar los salarios prestaciones sociales. Sin embargo los decretos demandados interpretaron erróneamente y aplicaron indebidamente la Ley 4° de 1992 al haber mermado el salario de un grupo de servidores públicos, razón suficiente para determinar que son contrarios a la Constitución y la Ley, así como para declarar su nulidad"*.
8. En esa misma decisión ordenó la nulidad de la normativa que a partir de 1993 hasta el 2007 habían establecido que la prima del 30% pagadera mensualmente no tendría carácter salarial.
9. Para los efectos y forma de aplicar la sentencia, allí mismo se aclara en la siguiente forma;
"En virtud de la potestad otorgada por la Ley 4° de 1992, el Gobierno Nacional expidió los decretos demandados, reproduciendo año por año la previsión de que el 30% del salario

111

palabras, son dos cosas completamente diferentes, pues la primera interpretación implica una reducción del salario básico al 70%, mientras que la segunda, que es la correcta de conformidad con la Ley y la Constitución Política, implica que se puede tomar el 30% del salario pero solamente para efectos de cuantificar la prima especial, para luego adicionarla al salario básico”.

10. En la sentencia de nulidad simple a la cual me refiero en el numeral anterior, se incluyó un ejemplo del suceso patente en los actos acusados a los fines de ilustrar lo que vino haciendo el Gobierno Nacional anualmente a los fines de fijar la prima especial de servicios en la equivalencia del 30% del salario básico, ejemplo que para ilustrar a la entidad a la cual me dirijo traigo a colación en este memorial, así:

38

TOMAMOS UN SALARIO BÁSICO DE \$10.000.000,00:

PRIMERA INTERPRETACIÓN (30% DEL SALARIO BÁSICO ES LA PRIMA MISMA).	SEGUNDA Y CORRECTA INTERPRETACIÓN (LA PRIMA EQUIVALE AL 30% DEL SALARIO BÁSICO).
SALARIO BÁSICO: \$10.000.000,00 Prima Especial (30%):\$3.000.000,00. SALARIO SIN PRIMA: \$7.000.000,00. Total a pagar al servidor: \$10.000.000,00.	SALARIO BÁSICO: \$10.000.000,00 PRIMA ESPECIAL (30%):\$3.000.000,00. Salario más prima: \$13.000.000,00. Total a pagar al servidor: \$13.000.000,00.

11. Si bien los actos acusados de nulidad simple en el proceso radicado No. **Consejo de Estado, Sección Segunda, en sentencia de abril 29 de 2014, Exp. 11001-03-25-000-2007-00087-00, M.P. Dra María Carolina Rodríguez Ruiz (Conjuez)** solo fueron los expedidos por el GOBIERNO NACIONAL por los años 1.993 a 2.007, no menos cierto es que los expedidos para fijar los salarios a partir del año 2008 y subsiguientes tienen las mismas connotaciones de ilegalidad e inconstitucionalidad que surtieron de sustento para la declaración de nulidad proferida en el antes mencionado fallo del CONSEJO DE ESTADO, de tal manera , que en la vía judicial se solicitará al operador de esa vía la inaplicación de los actos administrativos generales que fijó los salarios a partir del año 2.008 y por ende las pretensiones abarcarán desde el año 1993 en adelante hasta la presente, tal y es dispuesto en el artículo 148 del CPACA.

PRETENSIONES:

Pretendo le sean reconocidas a mi poderdante las siguientes sumas y conceptos , por la diferencia entre lo que le fue

... al Gobierno Nacional

AÑO	SALARIO MENSUAL DEVENGADO	PRIMA ESPECIAL DE SERVICIO (MENSUAL)	PRIMA ESPECIAL DE SERVICIO (ANUAL)
1993	\$ 1.812.500,00	\$ 543.750,00	\$ 6.525.000,00
1994	\$ 2.193.125,00	\$ 657.937,00	\$ 7.895.250,00
1995	\$ 2.587.888,00	\$ 776.366,00	\$ 9.316.396,00
1996	\$ 2.976.070,00	\$ 892.821,00	\$ 10.713.852,00
1997	\$ 3.214.158,00	\$ 964.247,00	\$ 11.570.968,00
1998	\$ 3.989.997,00	\$ 1.196.999,00	\$ 14.363.989,00
1999	\$ 4.388.997,00	\$ 1.316.699,00	\$ 15.800.389,00
2000	\$ 4.794.102,00	\$ 1.438.230,00	\$ 17.258.767,00
2001	\$ 4.922.229,00	\$ 1.476.668,00	\$ 17.720.024,00
2002	\$ 5.154.559,00	\$ 1.546.367,00	\$ 18.556.412,00
2003	\$ 5.344.763,00	\$ 1.603.428,00	\$ 19.241.146,00
2004	\$ 5.563.899,00	\$ 1.669.169,00	\$ 20.030.036,00
2005	\$ 5.869.913,00	\$ 1.760.973,00	\$ 21.131.686,00
2006	\$ 6.163.410,00	\$ 1.849.023,00	\$ 16.641.207,00
TOTAL			\$206.765.122,00

AÑO	PRIMA DE NAVIDAD	PRIMA DE NAVIDAD PAGADA	DIFERENCIA
1993	\$ 1.969.834,00	\$ 1.438.746,00	\$ 531.088,00
1994	\$ 2.383.500,00	\$ 1.817.824,00	\$ 565.676,00
1995	\$ 2.812.531,00	\$ 2.146.848,00	\$ 665.683,00
1996	\$ 3.234.408,00	\$ 2.471.074,00	\$ 763.334,00
1997	\$ 3.598.954,00	\$ 2.984.816,00	\$ 614.138,00
1998	\$ 4.467.674,00	\$ 3.475.301,00	\$ 992.373,00
1999	\$ 4.914.443,00	\$ 3.830.378,00	\$ 1.084.065,00
2000	\$ 5.368.047,00	\$ 4.199.191,00	\$ 1.168.856,00
2001	\$ 5.511.514,00	\$ 4.309.201,00	\$ 1.202.313,00
2002	\$ 5.771.661,00	\$ 4.508.492,00	\$ 1.263.169,00
2003	\$ 5.984.633,00	\$ 4.683.682,00	\$ 1.300.951,00
2004	\$ 6.230.003,00	\$ 4.868.775,00	\$ 1.361.228,00
2005	\$ 6.572.653,00	\$ 5.125.474,00	\$ 1.447.179,00
TOTAL			\$ 12.960.053,00

AÑO	PRIMA DE SERVICIOS	PRIMA DE SERVICIO PAGADA	DIFERENCIA
1993	\$ 906.250,00	\$ 697.115,00	\$ 209.135,00
1994	\$ 1.096.562,00	\$ 843.509,00	\$ 253.053,00

2001	\$ 2.532.897,00	\$ 1.987.618,00	\$ 542.279,00
2002	\$ 2.652.450,00	\$ 2.081.436,00	\$ 571.014,00
2003	\$ 2.750.326,00	\$ 2.158.241,00	\$ 592.085,00
2004	\$ 2.863.089,00	\$ 2.246.730,00	\$ 616.359,00
2005	\$ 3.020.559,00	\$ 2.370.301,00	\$ 650.258,00
2006	\$ 3.171.588,00	\$ 2.488.815,00	\$ 682.773,00
		TOTAL	\$ 6.489.636,00

AÑO	PRIMA DE VACACIONES	PRIMA DE VACACIONES PAGADA	DIFERENCIA
1993	\$ 981.770,00	\$ 726.161,00	\$ 255.609,00
1994	\$ 1.187.942,00	\$ 878.655,00	\$ 309.287,00
1995	\$ 1.401.773,00	\$ 1.036.814,00	\$ 364.959,00
1996	\$ 1.612.037,00	\$ 1.192.336,00	\$ 419.701,00
1997	\$ 1.838.654,00	\$ 1.442.727,00	\$ 395.927,00
1998	\$ 2.282.470,00	\$ 1.677.537,00	\$ 604.933,00
1999	\$ 2.510.718,00	\$ 1.845.292,00	\$ 665.426,00
2000	\$ 2.742.458,00	\$ 2.015.612,00	\$ 726.846,00
2001	\$ 2.815.753,00	\$ 2.070.437,00	\$ 745.316,00
2002	\$ 2.948.694,00	\$ 2.168.163,00	\$ 780.531,00
2003	\$ 3.057.463,00	\$ 2.248.168,00	\$ 809.295,00
2004	\$ 3.182.819,00	\$ 2.340.344,00	\$ 842.475,00
2005	\$ 3.357.874,00	\$ 2.469.063,00	\$ 888.811,00
		TOTAL	\$ 7.809.116,00

AÑO	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PAGADA	DIFERENCIA
1997	\$ 1.124.995,00	\$ 865.351,00	\$ 259.604,00
1998	\$ 1.396.498,00	\$ 1.095.357,00	\$ 301.141,00
1999	\$ 1.536.148,00	\$ 1.204.893,00	\$ 331.255,00
2000	\$ 1.677.935,00	\$ 1.316.105,00	\$ 361.830,00
2001	\$ 1.722.780,00	\$ 1.351.902,00	\$ 370.878,00
2002	\$ 1.804.095,00	\$ 1.415.714,00	\$ 388.381,00
2003	\$ 1.870.677,00	\$ 1.467.954,00	\$ 412.713,00
2004	\$ 1.947.364,00	\$ 1.528.140,00	\$ 419.224,00
2005	\$ 2.054.469,00	\$ 1.612.189,00	\$ 442.280,00
		TOTAL	\$ 3.287.306,00

AÑO	CESANTIAS	CESANTIAS	DIFERENCIA
------------	------------------	------------------	-------------------

1998	\$ 3.989.997,00	\$ 3.129.592,00	\$ 860.405,00
1999	\$ 4.388.997,00	\$ 3.442.552,00	\$ 946.445,00
2000	\$ 4.794.102,00	\$ 3.760.300,00	\$ 1.033.802,00
2001	\$ 4.922.229,00	\$ 3.862.582,00	\$ 1.059.647,00
2002	\$ 5.154.559,00	\$ 4.044.896,00	\$ 1.109.663,00
2003	\$ 5.344.763,00	\$ 4.194.154,00	\$ 1.150.609,00
2004	\$ 5.563.899,00	\$ 4.366.116,00	\$ 1.197.783,00
2005	\$ 5.869.913,00	\$ 4.606.252,00	\$ 1.263.661,00
2006	\$ 6.163.410,00	\$ 4.836.564,00	\$ 1.326.846,00
TOTAL			\$12.898.958,00

El total de las pretensiones es: \$ 250.210.191,00

En efecto, se tiene que al haberse cancelado el salario básico con un 30% menos de su importe, por haberse tenido dicha suma como prima especial, es el caso de que se corrija dicha falencia ordenando la reliquidación tanto del salario básico (aumento el 30% que se disminuyó) como de las prestaciones sociales tenido en cuenta el salario reajustado, todo en los precisos términos de la sentencia referenciada. En cuanto los efectos se tiene que por tratarse de una sentencia de nulidad, esta tiene efectos ex tunc como se señala en la misma sentencia, o sea hacia el pasado, quedando las cosas como si nunca hubiesen existido las normas declaradas nulas, y por tanto, su efecto es a partir de la Ley 4° de 1992, sin tener en cuenta las normas que la intentaron modificar para quitarle el carácter salarial a la prima especial y que recortaron el salario básico.

PETICIÓN FINAL ELEVADA A DERECHO DE PETICIÓN CONSTITUCIONAL DE INFORMACIÓN PARA AGOTAR VÍA GUBERNATIVA:

A fin de hacer CESAR LA VULNERACIÓN DEL DERECHO de mi cliente, y con base a las consideraciones que antes he plasmado en este memorial, SOLICITO A LA NACION- DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL , se sirva ORDENAR la reliquidación de los salarios, primas anuales , cesantías y bonificación por servicios prestados anuales en su condición de EX MAGISTRADA GRADO 21 DEL HONORABLE TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO JUDICIAL DE CARTAGENA, considerando a ese efecto la sentencia del 29 de Abril de 2.014, proferida por SALA DE CONJUECES DEL CONSEJO DE ESTADO en el proceso radicado No. 11001-03-25-000-2007-00087-00 ponencia DRA. MARIA CAROLINA RODRÍGUEZ RUIZ a partir del año 1993 y hasta la fecha de su retiro del año 2006.

La reliquidación objeto de este escrito, debe realizarse INDEXANDO las

fallo de nulidad proferido en el proceso radicado : No. Consejo de Estado, Sección Segunda, en sentencia de abril 29 de 2014, Exp. 11001-03-25-000-2007-00087-00, M.P. Dra María Carolina Rodríguez Ruiz (Conjuez).

Anexos:

Poder para actuar.

NOTIFICACIÓN: Centro la Matuna Edificio Banco Popular Oficina 10-04, de Cartagena D. T. y C. Correo electrónico: albertovelezbaena50@yahoo.com

40

MUY ATENTAMENTE,



Alberto Vélez Baena
C.C. N. 9074593 de Cartagena
T.P.No.52656 C.S.J.

Señores
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL.
BOGOTÁ D.C.

REF : OTORGAMIENTO DE PODER .

LA suscrita ciudadana OLGA SALVADOR DE VERGEL , identificada con la C.C. No. 33.131.570, por medio del presente otorgo poder especial amplio y suficiente al abogado ALBERTO JAVIER VÉLEZ BAENA quien se identifica con la CC No. 9074593 de Cartagena y TP No. 52656 del C.S.J. para que a mi nombre y representación , agote la vía gubernativa de proceso administrativo de reclamación SALARIAL y prestaciones sociales , para lo cual deberá solicitar a esa entidad el reconocimiento, liquidación y cobro de las sumas que por los anteriores conceptos me adeuda la NACIÓN- DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL , las cuales se desprenden del pronunciamiento de la SALA DE CONJUECES DEL H. CONSEJO DE ESTADO de fecha veinte y nueve (29) de Abril de 2.014 , Ponencia H.C. MARÍA CAROLINA RODRÍGUEZ RUÍZ, proferida en el proceso de NULIDAD SIMPLE radicado No. 11001- 03-25- 000-2007- 00087-00 , ejercitada contra los artículos 9º del Decreto 51 de 1993; artículos 9º y 10º del Decreto 54 de 1994 ; artículos 6º del Decreto 57 de 1993; artículo 9º del D. 104/1994; artículos 6º del Decreto 106 de 1994; artículos 9 y 10 del Decreto 107 de 1994; artículos 10 y 11 del Decreto 26 de 1995; artículos 7 del Decreto 43 de 1995; artículos 9º del Decreto 34 de 1996; artículos 10 , 12 y 14 del Decreto 35 de 1996 ; artículos 6º del Decreto 36 de 1996; artículos 9º del Decreto 47 de 1997 ; artículos 9,11 y 13 del D. 56 de 1997; artículos 6 del Decreto 76 de 1997 ; artículos 6º del Decreto 64 de 1998; artículos 9º del Decreto 65 de 1998; artículos 9º , 11 y 13 del Decreto 37 de 1999; artículos 9º del Decreto 43 de 1999; artículos 6 del Decreto 44 de 1999 ; artículos 9º del Decreto 51 de 1993 ; artículos 9º, 11 y 13 del Decreto 2734 de 2000; artículos 9º del Decreto 2739 de 2.000 ; artículos 7º del Decreto 2740 de 2.000; artículos 9º del Decreto 1474 de 2001; artículos 7º del Decreto 1475 de 2001 ; artículos 9º , 11 y 13 del Decreto 1482 de 2001; artículos 7º del Decreto 2720 de 2001; artículos 9º ,11 y 13 del Decreto 2730 de 2001; artículos 6º del Decreto 673 de 2002; artículos 9º del Decreto 682 de 2002; artículos 8, 10 y 12 del Decreto 683 de 2002; artículos 8, 10 y 12 9º del Decreto 3548 de 2003 ; artículos 9º del Decreto 3568 de 2003; artículos 6º del Decreto 3569 de 2003; artículos 8,10 y 12 del 4169 de 2004 ; artículos 9º del Decreto 4171 de 2004; artículos 6º del Decreto 4172 de 2004; artículos 8, 10, y 12 del Decreto 933 de 2005; artículos 9º del Decreto 935 de 2005; artículos 6º del Decreto 936 de 2005; artículos 9º del Decreto 388 de 2006; artículos 6º del Decreto 389 de 2006; artículos 8, 10 y 12 del Decreto 392 de 2006; artículos 9º del Decreto 617 de 2007 ; artículos 6º del Decreto 618 de 2007 ; artículos 8, 10 y 12 del Decreto 621 de 2007; artículos 8, 9 y 10 del decreto 3048 de 2007.-

Con este poder, confiero facultades para reclamar las sumas que me adeuda la entidad a la cual se dirige debidamente indexadas, recibirlas, sustituir y reasumir, aportar y solicitar pruebas, ejercitar recursos, notificarse a mi nombre y en fin todo lo que estime conducente en pro de los intereses encomendados y muy especialmente para agotar la vía gubernativa.-

ATENTAMENTE,

Olga Salvador Vergel
OLGA SALVADOR DE VERGEL



Notaría Tercera

Del Círculo de Cartagena

10
114
N³

N3-16039



Diligencia de Presentacion Personal

Ante el Notario Tercero del Círculo de Cartagena

fue presentado personalmente el documento anexo por:

OLGA ITALINA SALVADOR BETANCOURT

Identificado con C.C. **33131570**

Cartagena:2014-10-27 11:10



Para constatar la autenticidad de este documento, pasadas 6 horas de la fecha del mismo puede consultar en <http://notariaterceradecartagena.com/consulta-tramite.html>